

## 14a. REUNION - Continuación de la 6a. SESION ORDINARIA

JUNIO 16 DE 1915

PRESIDENCIA DEL SR. D. ALEJANDRO CARBO

### MINISTROS PRESENTES:

de obras públicas, doctor Manuel Moyano.

### DIPUTADOS PRESENTES:

Acosta, Aguirre (D.), Aguirre (R. M.), Albarracín, Aldao, Alvear, Aracibia Rodríguez, Araya (P.), Araya (R.), Arce, Atencio, Avellaneda (M. A.), Avellaneda (N. A.), del Barco, Barrera, Bas, Bonastre, Borda, Bravo, Cabanillas, Cafferata, Cantilo, Castillo, Coronado, Costa, Cúneo, Demarchi, Demaría, Dickmann, Drago, Echagüe, Echegaray, Frugoni Zavala, Gallo, Gandolla, Giménez, Iturbe, Jaramillo, Justo, Lagos (O. A.), Le Bretón, Leguizamón, Linares, López Buchardo, Marchini, Marcó, Massa, Melo, Mihura, Mora y Araujo, Neriaga, Nougues, Oliver, Olmedo, Ordóñez, Oyhanarte, Padilla, Palacios, Pastor, Paz, Pereyra Iraola, Pérez Virasoro, Pinedo Redoni, Reibel, Repetto, Roca, Rojas, Rolón, Rothe, Saavedra Lamas, Saguier, Salas Groño, Salvatierra, Semprún, de Tomaso, de la Torre, Uriburu, Valdez, del Valle, de Vedia, Veyga, Zaccagnini, Zeballos (E. S.).

### DIPUTADOS AUSENTES:

#### Con aviso:

Carballido, Castellanos, Cevallos, Correa, Frers. Funes (Lindo), Funes (Lucio), García, Gerzón, González Pérez, Igarzábal, Jerez, Mariño, Márquez, Mena, Ríu, Santamarina, Zavalia Guzmán.

#### Sin aviso:

Bejarano, Beltrán, Bercetche, Escobar, Hernández, Mercado, Morán, Paíz, Pesenti, Sánchez Viamonte, Santillán, Saravia, Silveti, Varela, Vergara.

### SUMARIO

#### 1.—Peticiones particulares.

2.—Proyecto de minuta de comunicación al poder ejecutivo del señor diputado Alfredo L. Palacios relativa a la **condonación de la deuda del Paraguay** procedente de la guerra y devolución de los trofeos.

#### 3.—Incidencia.

4.—Proyecto de ley de los señores diputados Gerónimo del Barco y Mariano de Vedia acordando una **recompensa** a la señora Carmen García de Carranza, viuda del doctor Adolfo P. Carranza.

5.—Proyecto de ley de los señores diputados Emilio Marchini y Agustín Redoni creando una **escuela de artes y oficios** en Gualaguaychú.

6.—Proyecto de ley del señor diputado Miguel Iturbe relativo a **jubilación de empleados de los ferrocarriles del estado**.

7.—Proyecto de ley del señor diputado Delfín Leguizamón sobre construcción de un **ramal férreo** de Güemes (F. C. C. N.) hasta la margen derecha del río Lavayén.

8.—Proyecto de ley del señor diputado Juan J. Atercio creando varias **cátedras** en el colegio nacional del Azul.

#### 9.—Despacho de las comisiones.

10.—El señor presidente comunica a la honorable cámara que el señor ministro de justicia e instrucción pública concurrirá el viernes próximo a contestar la **interpelación** formulada por el señor diputado Juan B. Justo.

- 11.—Moción para la publicación de antecedentes relativos a la ley de vinos.
- 12.—Proyecto de ley del señor diputado Guillermo Rothe sobre devolución de una fracción de terreno a a provincia de Córdoba.
- 13.—Consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley en segunda revisión sobre jubilación de empleados ferroviarios.

En Buenos Aires, a 16 de junio de 1915, a las 3.45 p. m., dice el

**Sr. Presidente.** — Continúa la sesión con 61 señores diputados.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## 1

## PETICIONES PARTICULARES

Martín P. Palacios, teniente coronel retirado, solicita el pago de sus haberes de acuerdo con la ley de presupuesto. — (*A la comisión de guerra.*)

—La sociedad nacional de farmacia hace observaciones al proyecto de ley sobre el trabajo de los empleados de comercio. — (*A sus antecedentes.*)

—La sociedad de beneficencia de Victoria (Entre Ríos) solicita un subsidio. — (*A la comisión de presupuesto.*)

—Juan Bautista Garibaldi, teniente 1º retirado, solicita una remuneración. — (*A la comisión de guerra.*)

—Juan A. Waldorp reitera su solicitud pidiendo la exoneración de derechos de aduana para las obras de canalización del delta del Paraná. — (*A la comisión de presupuesto.*)

—Gabriela Kühn solicita una beca. — (*A la comisión de presupuesto.*)

—La sociedad de beneficencia de Victoria (Entre Ríos) solicita el mantenimiento del subsidio destinado a construcciones. — (*A la comisión de presupuesto.*)

—Maquinistas y foguistas de los ferrocarriles de la República solicitan despacho del proyecto reglamentando el trabajo de los empleados ferroviarios. — (*A sus antecedentes.*)

—Varios ciudadanos solicitan la sanción del proyecto sobre condonación de la deuda de la guerra del Paraguay. — (*A la comisión de guerra.*)

## SOLICITUDES DE PENSION:

María D. Cabrera de Ferro, Orfelía Lobos de Alcácer, Irene B. de Castilla Ferrer e Irene y Mercedes Castilla. — (*A la comisión de peticiones.*)

## 2

## DEUDA DEL PARAGUAY.

## TROFEOS DE GUERRA

**Sr. Palacios.** — Solicito del señor presidente quiera ordenar la lectura de

la solicitud relativa a la condonación de la deuda del Paraguay y devolución de los trofeos de guerra.

**Sr. Presidente.** — Se va a leer.

—Se lee:

Buenos Aires, junio 14 de 1915.

*A la honorable cámara de diputados de la Nación Argentina.*

Los abajo firmados, ciudadanos argentinos, venimos a distraer la atención de V. H. para solicitar, en lo posible, la aprobación de un proyecto presentado a ese alto cuerpo por el diputado doctor Alfredo L. Palacios, por el que se condona la deuda de guerra que pesa sobre la República del Paraguay y se devuelven los trofeos a la nación hermana.

El pueblo argentino, cuya generosidad es proverbial, no ha de ser esta vez inconsecuente con su propia tradición, y, aunque aquellos trofeos recuerden una gloriosa campaña del ejército patrio, la devolución que se solicita, en vez de menoscabar los triunfos pasados, vienen a acrecentarlos.

La campaña que se inició en contra de una tiranía, y no de un pueblo, no ha podido dejar rencores entre los dos países y, muy por el contrario, desde entonces acá son cada día más fuertes los lazos que unen a las dos repúblicas.

El estado oriental, fecundo en iniciativas generosas, ha condenado la deuda y ha devuelto los trofeos. La ciudad de Montevideo, al mirarlos salir, saludólos con cariñoso respeto, manifestando así no sólo sus simpatías hacia el pueblo paraguayo, sino el deseo de afianzar una política de concordia, que, felizmente, ha sido sostenida.

La República Argentina, que casi ha sancionado como un principio internacional la generosa frase de Mitre al creer, con el gran patricio, que "la victoria no da derechos", no puede ser la última en hacer real este pensamiento.

Vínculos de sangre, de tradición y de idioma nos unen a la República del Paraguay. El afecto de pueblo a pueblo está y estuvo a veces por encima de las desinteligencias de los gobiernos, y quizá el resultado más noble de la guerra fué el de acercar a los contendientes para que se sintieran indisolublemente unidos por lazos de amistad al final de la jornada.

Hace muy poco tiempo nuestro país obtuvo en Niagara Falls el más bello triunfo a que puede aspirar la diplomacia cuando está al servicio de la paz; y recientemente, con motivo del tratado del A B C, los cancilleres de las tres repúblicas americanas han afianzado de una manera definitiva la paz del continente.

En virtud de tales consideraciones y convenidos que el motivo de esta solicitud, en vez de disminuir glorias argentinas, acrecentará nuestro propio prestigio ante los pueblos hermanos que tanto y con tan justa razón esperan mucho de nosotros, venimos a pedir a la honorable cámara de la nación la condonación de la deuda y la devolución de los trofeos pertenecientes a la República del Paraguay.

Saludamos a V. H. con nuestra consideración más distinguida. — (Siguen las firmas).

## 6

**JUBILACION DE FERROVIARIOS**

## PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etcétera.*

Artículo 1o. — Los empleados permanentes en los servicios de tracción, vía y obras, tráfico y movimiento de la administración de los ferrocarriles del estado, con excepción de los que trabajen en la oficina central, tendrán derecho a jubilación ordinaria con veinticinco años de servicio y cuarenta y cinco de edad.

Art. 2o — El poder ejecutivo incorporará el artículo anterior a la ley 4349 en la forma más conveniente.

Art. 3o. — Comuníquese al poder ejecutivo.

*M. P. Urbe.*

**Sr. Iturbe.** — Pido la palabra.

Con motivo de la discusión que preocupa a la honorable cámara y no terminada aún, relativa a la jubilación de los empleados de ferrocarriles, particulares, he pensado que podía por mi parte tratar de mejorar la situación de los del estado, mediante el proyecto de que acaba de dar lectura la secretaría, y que interpreta una aspiración legítima de los ferroviarios del estado.

Las razones que me han movido a formularlo son desde luego evidentes y las conocen tan bien como yo los señores diputados: estos empleados tienen un recargo excesivo de trabajo, tienen a su cargo tareas de la mayor responsabilidad y son los que tienen que desarrollar mayor consagración y hacer mayores esfuerzos para desempeñar sus funciones.

La legislación vigente en la República sobre jubilaciones y pensiones, no obstante que ha sido modificada por cuatro leyes sucesivas, concede mayores beneficios a cierta clase de funcionarios y empleados de la administración pública; pero no ha incluido en ellos a esta clase de servidores del país, no obstante que se encuentran en la situación más favorable para merecer ser comprendidos en los privilegios que favorecen a otros empleados.

Los empleados privilegiados en la actualidad son los de la administración de justicia y de instrucción pública, especialmente de la instrucción primaria, los de correos y telégrafos, los de policía de seguridad, penitenciaria y cárceles, y finalmente los del cuerpo de bomberos.

Considero completamente equitativos los servicios de los maquinistas, jefes de estación y guardatrenes a los

servicios que prestan los empleados de correos, en cuanto al recargo de tareas, y los empleados de bomberos en cuanto a los peligros que tienen que afrontar. En general, todos han reconocido con motivo de la discusión que ha tenido lugar en la cámara que los ferroviarios son merecedores de participar de estos beneficios, porque tienen que realizar realmente un esfuerzo continuado en el desempeño de sus tareas, las que les exigen además conocimientos especiales.

Esto es tanto más exacto tratándose de los ferrocarriles del estado que atraviesan regiones sumamente peligrosas, en donde la naturaleza ha acumulado toda clase de obstáculos, de manera que los accidentes ferroviarios suceden allí con relativa frecuencia y tienen que afrontar precisamente los maquinistas, los guardatrenes y muchos otros empleados.

Por otra parte, el estado de prosperidad de la caja nacional de pensiones y jubilaciones me permite asegurar que este gravamen aparente no traerá ninguna perturbación en su marcha futura. Para hacer esta afirmación me fundo en que la presidencia actual de la caja considera que los fondos con que cuenta son suficientes para afrontar cualquier gasto extraordinario que pueda ocurrir. Creo que no hay ningún peligro en llevar a la práctica esta disposición y que el proyecto puede sancionarse.

No he de hacer la apología de lo que es un maquinista, ni de lo que es un jefe de estación, pues esto se ha hecho ya con elocuencia y con eficacia por algunos señores diputados.

Me limito, por lo tanto, a pedir el apoyo de mis honorables colegas para que el proyecto pase a comisión.

—Apoyado.

**Sr. Presidente.** — Pasará el proyecto a la comisión de legislación.

## 7

**FERROCARRILES**

## PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etcétera.*

Artículo 1o. — Autorízase al poder ejecutivo para construir un ramal férreo, que, partiendo de la estación Güemes, en la línea del ferrocarril central norte y pasando por la chacra experimental de agricultura de Madre Vieja, llegue a la margen derecha del río Lavayén.

sión de agricultura respecto de este asunto.

## 12

## DEVOLUCION DE TIERRAS

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Rothe.** — La he pedido, señor presidente, para reiterar un proyecto que presenté en las últimas sesiones ordinarias de 1913, sobre devolución de algunas hectáreas de tierra que son parte de las donadas por la provincia de Córdoba al gobierno de la nación, para establecer la escuela de agricultura.

Este proyecto interesa al gobierno de Córdoba, que desea construir un estadio y habilitar un local para ferias y exposiciones ganaderas, un local permanente para exposiciones de máquinas agrícolas, de semillas, de plantas y de frutos; interesa a la población escolar de la ciudad, que tendrá un local adecuado para deportes al aire libre; interesa a los alumnos de la escuela de agricultura de la Nación, y, por consiguiente, a la Nación misma, que tendrá un medio fácil y económico, desde que no le va a ocasionar gasto alguno el proporcionar instrucción práctica a los alumnos de dicha escuela. En una palabra, se trata de un proyecto de verdadero interés general, y por solicitudes diversas que he recibido de mi provincia, me veo en la necesidad, en la obligación casi, de reiterarlo, a pesar de la poca atención que ha merecido de la comisión de hacienda.

—Apoyado.

**Sr. Presidente.** — Apoyado el proyecto, se da por reproducido, pasando a la comisión respectiva.

—Proyecto reproducido por el señor diputado Rothe:

## PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etcétera.*

Artículo 1o. — Autorízase al poder ejecutivo a devolver a la provincia de Córdoba una fracción de terreno ubicada al este y dentro del perímetro que ocupa la escuela nacional de agricultura, compuesta de cincuenta y seis hectáreas, tres mil seiscientos veintinueve metros cuadrados, y encerrada por los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K del plano de dicha escuela.

Art. 2o. — Los gastos que demande la presente ley serán sufragados de rentas generales.

Art. 3o. — Comuníquese al poder ejecutivo.

## 13

## JUBILACION DE FERROVIARIOS

**Sr. Presidente.** — Se va a pasar a la orden del día.

Continúa la discusión sobre las reformas introducidas por el honorable senado al proyecto de ley de jubilación de los ferroviarios.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Cafferata.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — La tiene el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Araya (R.).** — Yo no tendría inconveniente en que hiciera uso de la palabra el señor diputado...

Debo comenzar esta exposición, señor presidente, felicitando a todos los señores diputados por la atención y el cuidado que prestan a este proyecto de ley de jubilación y pensión ferroviaria, que es la primera ley de justicia social que el parlamento argentino va a dictar y que define, a mi entender, una política distinta de la que hasta ahora se ha seguido en esta República. En vez de mirar hacia arriba, hacia las clases privilegiadas, hacia los herederos de la fortuna, del saber y de las comodidades de la vida, mira ahora hacia lo bajo, hacia la masa obrera, para auscultar sus dolores, conocer sus necesidades y resolverlas de acuerdo con principios de previsión y de justicia social que se han hecho carne en los países más adelantados de la Europa y que nosotros, felizmente, comenzamos a adoptar también.

El estudio de los presupuestos europeos demuestra que el aumento continuo en sus gastos y el déficit cada vez más alarmante que los agobia y que es motivo de la preocupación de todos los hombres de gobierno de la vieja Europa, se debe a dos causas fundamentales: una mala, señor presidente; otra buena, óptima.

La primera causa es debida a la preparación que para la guerra, con el objeto de evitarla, han hecho los países europeos, insumiendo con ello capitales enormes e imponiendo gravámenes considerables a la renta y a la riqueza, para fracasar más tarde en

su propósito de obligar a la paz por el poderío en la guerra, como se demuestra ahora en esta gran catástrofe universal, en esta hora de desolación y de dolor que no solamente aflige a las naciones en lucha, sino a la humanidad toda.

La otra causa,—la buena, la óptima—es debida a las leyes de justicia social, como las he llamado, que los países europeos se han puesto a dictar, borrando muchas lacras y miserias, asegurando a la totalidad de la población los beneficios que antes se reservaban a las clases privilegiadas, a los burgueses, como acostumbran llamarlos los señores diputados socialistas.

Yo miro esta primera obra sólo como la acción de abrir la puerta de un horizonte nuevo de la política argentina, que debe olvidarse de sus propósitos de mando y dominio político para entrar a resolver las cuestiones sociales dentro de los hábitos y el espíritu arraigado en todas las naciones que marchan a la cabeza de la civilización.

Después de la sanción de esta ley ha de venir la de seguros sobre accidentes del trabajo, y también la de pensiones y jubilaciones para otros obreros tan meritorios como los ferroviarios, para los obreros del transporte marítimo, los maquinistas, foguistas y marineros, que trabajan en la circulación de la riqueza por agua, que labran la prosperidad en que nos sentimos envueltos y de la cual hacemos derivar todas nuestras comodidades.

He de recordar, siguiendo el ejemplo del señor diputado Palacios, no a los maquinistas de los ferrocarriles, sino a los maquinistas y a los forjistas de los buques, encerrados en un espacio estrecho, viviendo dentro de una temperatura abrasadora y ahogados casi por el polvo del carbón que los envuelve y los penetra hasta hacerles imposible la respiración.

Solamente la sana clase obrera marítima de nuestro país puede soportar tan rudas faenas, y justo es que en el momento en que reconocemos el derecho a la jubilación para los obreros de transportes terrestres, recordemos también a esos obreros del transporte marítimo, y les digamos en un saludo de esperanza: hasta pronto, compañeros; hasta el momento en que el congreso argentino se preocupe y dicte

también para vosotros la ley de justicia que asegure vuestras horas grises de la vejez."

Es bajo estos auspicios, señor presidente, que entro a este debate a contestar las observaciones que me han hecho los señores diputados socialistas.

No he de recordar las observaciones más o menos hirientes para los diputados radicales hechas por los diputados socialistas, pero he de concretarme solamente a considerar las observaciones de fondo y de doctrina que han formulado, porque creo que en estos momentos y tratándose de un asunto tan importante, debemos alzar la mente y el espíritu para no ocuparnos de este asunto, sino en lo que pueda interesar al país.

Concuerdo con los señores diputados Dickmann y de Tomaso en que este proyecto no es sino un prolegómeno, una preparación de la verdadera ley de jubilaciones y pensiones para los ferroviarios y que en ese sentido debemos aportar a este debate todos los antecedentes, todos los datos necesarios para preparar esa otra nueva ley, que debe ser de amplia justicia y de total satisfacción de las reivindicaciones de los obreros de los ferrocarriles.

Yo disiento con la manera de encarar este asunto por parte de los señores diputados socialistas. Ellos, señor presidente, se preocupan de conservar el derecho de huelga, para, por medio de ella, ir más tarde resolviendo poco a poco las diferencias que ocurran entre los obreros ferroviarios y las empresas. Yo preferiría que en este momento resolviésemos todas esas cuestiones para hacer imposibles las huelgas de los obreros ferroviarios en beneficio de su tranquilidad y de su comodidad y en beneficio, también, de la tranquilidad, comodidad y riqueza del país.

—Ocupa su asiento en el recinto el señor ministro de obras públicas.

El señor diputado Dickmann ha dicho que los obreros satisfechos no hacen huelga; y yo creo que es el momento de que satisfagamos a esos obreros, para que la vida económica, en vez de ser una sucesión de luchas, sea una continuidad de unión y de armonía entre el capital y el trabajo, para que prospere más nuestra riqueza y se desarrollen más nuestros progresos.

Yo esperaba que los señores diputados socialistas en esta discusión habrían de hablarnos de algo más que de jubilaciones y pensiones ferroviarias; yo esperaba oírlos aportar al debate todo el conocimiento que ellos tienen la obligación de poseer, desde el momento que dicen que viven la vida de los obreros.

**Sr. Cúneo.** — Hay varios diputados socialistas que todavía no han tomado parte en el debate.

**Sr. Araya (R.).** — Me refiero a los señores diputados Dickmann y de Tomaso.

**Sr. Cúneo.** — No hemos terminado; recién empezamos.

**Sr. Araya (R.).** — Me alegro, señor presidente, de saber que los señores diputados socialistas recién empiezan: puede ser que cambien de procedimiento y traigan al debate algo mejor de lo que han aportado hasta ahora.

Esperaba, decía, de los señores diputados socialistas, que por el hecho de vivir, como dicen que viven, la vida de los obreros, habrían de hablar a la cámara de algo más que de jubilaciones y pensiones ferroviarias. Esperaba que ellos se preocuparían también de estudiar y preparar el estatuto de los obreros ferroviarios para asegurarles la estabilidad en sus puestos, para preparar una forma justiciera de ascenso, y también, señor presidente, para establecer dentro del organismo de la ley los medios de resolver no sólo los conflictos internos, sino también los externos con las empresas.

**Sr. Bravo.** — ¿Si me permite el señor diputado?... Con el consentimiento de la presidencia.

**Sr. Presidente.** — No, señor diputado; tenga la bondad de no interrumpir.

Puede continuar con la palabra el señor diputado Araya.

**Sr. Araya (R.).** — Me parece mejor. No he querido por mi parte molestar a los señores diputados socialistas cuando han hecho uso de la palabra, para no hacerles perder la unidad de la exposición. Permítame el señor diputado exponer mis puntos de vista, y después va a tener tiempo de hacer todas las observaciones que desee.

Nada de lo que esperaba ha ocurrido, señor presidente. En vez de ocuparse de las diferencias que existen entre los obreros y las empresas, olvidan to-

do lo que es esencial y fundamental, según mi modo de entender, para defender un derecho teórico de huelga, para mantener en sus manos un arma para producir discordias y violencias, en vez de considerar el problema en toda su magnitud y proyecciones, entrando a resolverlo en la forma justiciera que es necesario hacerlo.

**Sr. Bravo.** — ¡Pero si ya hay proyectos presentados por la representación socialista en ese sentido! ¡No podemos hablar de toda la cuestión obrera a propósito de un artículo de una ley!

**Sr. Presidente.** — Lo que está en discusión son las modificaciones al proyecto de ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias.

**Sr. Araya (R.).** — Yo no tengo inconveniente en cederle la palabra al señor diputado Bravo y hablar después de él, si es que no puede tener su lengua quieta.

**Sr. Bravo.** — Muchas gracias, señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — No desearía imponerle el suplicio de no hablar, queriendo hacerlo.

**Sr. Bravo.** — Muchas gracias; muy complacido.

**Sr. Araya (R.).** — Yo no pienso, señor presidente, como los señores diputados socialistas, o, mejor dicho, de acuerdo con la teoría emitida por el señor diputado Dickmann, que entre los obreros y los empresarios no existe un contrato de trabajo.

El señor diputado Dickmann sostenía que hay un "trato", y establecía como fundamento para ello que siendo distinta la situación de los empresarios o capitalistas de la de los obreros, y debiendo estos últimos hacer su elección de trabajo dentro de la presión de las necesidades económicas y personales, no han podido poner su plena voluntad en la aceptación de las condiciones de trabajo que se les fijan.

Me extraña, señores diputados, que un miembro de esta cámara que tiene la misión de legislar y que, por consiguiente, debe vivir dentro de la legalidad, siente como principio para legislar la ilegalidad, para llegar más tarde a una legislación que resultaría inútil, que podría violarse en todo momento, dado que los obreros podrían declarar nulos e irritos los contratos de

trabajo que hubieran llevado a cabo.

¿Cómo es posible, señor, que nosotros aceptemos esa exposición de doctrina como fundamento en contra de un proyecto de ley en el cual colaboran los mismos señores diputados socialistas? ¿Es que hay ley en nuestro país, o es que no la hay? Si es que no hay leyes que obliguen a los obreros, entiendo que no debemos legislar sobre ellos en ninguna manera.

Existe contrato de trabajo, porque el obrero que concurre a la fábrica o que busca trabajo en casa de un patrón, no lo hace sin antes convenir el precio del trabajo, la duración de la jornada de labor y las condiciones en que ese trabajo ha de realizarse. Existe, pues, un contrato del trabajo, contrato que es el vínculo indispensable para que haya relaciones de derecho entre el patrón y el obrero.

Yo no quiero hacer a los obreros ferroviarios la injuria que a mi entender resalta de esta afirmación del señor diputado Dickmann; yo quiero creer que ellos, que propician una ley que les es beneficiosa, han de darse cuenta de que esa ley es un compromiso para las empresas que deben contribuir con un tanto por ciento para la formación del fondo de la caja con que se han de atender las pensiones y las jubilaciones de los ferroviarios, un compromiso para todo el país, al cual imponemos un tributo sobre los pasajes y un compromiso también para ellos y de honor que han de cumplir, porque no los considero distintos a los demás ciudadanos de la República, y pienso que si han de ser celosos en defender sus derechos, también lo serán para cumplir sus obligaciones. Creo que el obrero ferroviario, como cualquier otro habitante del país, no tiene sino una cara que mira hacia la ley para defender los derechos que ella le acuerda y para cumplir las obligaciones que la misma le impone.

Llegamos, señor presidente, al punto fundamental para mí, que es el que define lo que es una huelga. Pero antes de entrar a la definición de la huelga, quiero decir que los señores diputados socialistas que me han precedido en el uso de la palabra han formulado un argumento político al acusarme de ser enemigo de las reivindicaciones obreras por el hecho de que yo hacía derivar la huelga de un otro origen distinto al que ellos le atribuyen. Yo he

dicho, y lo he de repetir, que no he encontrado en ninguna ley ni en ninguna constitución del mundo definido el derecho de huelga ni enumerado entre los llamados naturales que consignan todas las constituciones, como ser el derecho de expresar libremente el pensamiento, el derecho de asociación, el derecho de reunión y tantos otros que podría mencionar.

La circunstancia de que ese derecho no exista escrito en ninguna constitución no tiene absolutamente nada que hacer con la manifestación de una mala voluntad respecto del elemento obrero. Yo no he de tratar de convencer a los socialistas si es que tienen su *parti pris*, pero sí dejo constancia de que el argumento es de carácter político.

**Sr. de Tomaso.** — Hemos dicho que el señor diputado había defendido calurosamente el artículo 11. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo fundamental.

**Sr. Araya (R.).** — Dije que la huelga deriva de la libertad de trabajo, libertad que hace que un obrero pueda ofrecer su fuerza de trabajo a un empresario bajo un precio y condiciones determinadas, lo que le da a la vez derecho para no trabajar, es decir, para huelgar.

Añadí que aquello que podía hacerse individualmente, se hacía también colectivamente; que esa cesación de trabajo o esa falta de voluntad de trabajar colectivamente es lo que llamamos *huelga*.

En 1900 tuvo lugar una serie de conferencias en la escuela de altos estudios sociales, de París, dictadas por Carlos Gide, H. Barthelemy, P. Bureau, A. Kreuser, C. Perreau, Ch. Picquenart, A. G. Sayous, Fagnot y Vandervelde.

Esta serie de conferencias ha sido publicada por la librería Alcán con el título de "El derecho de huelga" y resulta que ese derecho ha sido objeto de cuatro definiciones distintas: la primera, que dice que "el derecho de huelga es el derecho de no trabajar o de no ceder su trabajo, sino bajo ciertas condiciones"; la segunda, que establece que "es la ruptura del contrato del trabajo por el cual el obrero había alquilado sus servicios a un empresario"; la tercera, que "es un medio de coerción ejercido por el obrero sobre el empresario para forzarlo a modificar las

condiciones del contrato de trabajo"; y la cuarta que dice que "la huelga no es una ruptura sino una suspensión del contrato de trabajo."

Consecuente con las ideas que he dejado expuestas, entiendo que la primera definición es la verdadera, es decir, que "el derecho de huelga es el derecho de no trabajar o de no ceder su trabajo, sino bajo ciertas condiciones."

En el hecho, la huelga significa otra cosa distinta, y responde a la tercera definición, o sea "es un medio de coerción ejercido por el obrero sobre el empresario para forzarle a modificar las condiciones de contrato de trabajo." Y es un medio de coerción que se utiliza siempre por las uniones obreras como elemento de guerra social, en la que las huelgas significan una forma de entrenamiento que los señores socialistas ponen en manos de los obreros para prepararlos para la lucha final, para el momento en que estalle la huelga general. Son como los ejercicios de movilización del ejército, necesarios para prepararlo para el momento de una guerra efectiva.

Eso es en el hecho, porque en el derecho, existiendo el contrato de trabajo, las dos partes están obligadas a cumplirlo, y no se comprende en manera alguna cómo una de las partes, por su propia voluntad, pueda romperlo y ejercer una coerción violenta y sistemática a objeto de hacer que ese contrato se modifique en provecho de una sola de las partes y en perjuicio de la otra.

Hay otro punto que conviene también tener en cuenta en lo que a la huelga se refiere; y es un problema que conviene definirlo, porque realmente apasiona a todos los señores socialistas y porque tiene su importancia, desde el momento en que ha de demostrar si la conducta que muchas veces se observa en las huelgas responde o no a principios de derecho y de justicia.

La huelga ¿es una ruptura del contrato de trabajo, o como los señores socialistas lo sostienen, no es sino una suspensión de ese contrato? Jean Jaurés exclamaba, el 5 de junio de 1904: "Nosotros, los socialistas, hemos proclamado siempre que la huelga suspendía, pero no rompía, el contrato, y que una tal relación y un tal vínculo subsistía entre las empresas y los obreros en huelga, y que el patrón no podía

llamar a otros obreros para ocupar el lugar de aquéllos, con los cuales no debía negociar, sino cometiendo un verdadero abuso de poder." Los tribunales de Francia con motivo de las muchas huelgas que sucedieron a continuación del año 1909, se avocaron el estudio de esta cuestión, y unánimemente han resuelto que la huelga rompe el contrato de trabajo y que quedan desligados por completo los obreros y patronos de todas las obligaciones que derivan de él, y que, en ese sentido, los patronos o empresarios tienen derecho de reemplazar a los obreros huelguistas por otros obreros. Hay un caso, si no me olvido el nombre, de un obrero Loichot, que demandó a su patrón M. Huffleu, por haberle reemplazado y exigía una indemnización por una semana de trabajo, a razón de 5 francos diarios; eran 40 francos que reclamaba como indemnización. La corte de apelación rechazó la demanda y condenó al obrero, por haber roto sin previo aviso su contrato de trabajo, a pagar al patrón una indemnización de 28 francos.

Definida la huelga, señores diputados, corresponde que veamos si ese derecho de huelga es un derecho absoluto o es un derecho limitado; si ese derecho llega a dar facultad a los obreros para abandonar el trabajo por cualquier causa, motivo o en cualquier tiempo, o si es, señores diputados, un derecho limitado y, por consiguiente, sujeto a reglamentación. Por de pronto el buen sentido nos dice que no puede haber derechos absolutos. Hasta los derechos más simples, hasta las facultades que más corrientemente se usan, indudablemente están sujetas a reglamentaciones legales. Tenemos, por ejemplo, el de pasear por las calles. Cualquier persona tiene la más amplia libertad para pasear en la dirección que quiera y en la hora que lo considere más oportuno. Sin embargo, si cualquiera de nosotros quisiera salir a la calle en un mitin de 10, 15 o 20 mil amigos, no podría hacerlo, y habría de reclamar permiso y autorización a las autoridades, y hacer el paseo dentro de las condiciones establecidas por las autoridades mismas.

Si eso es así, podemos imaginarnos que todos los derechos son igualmente limitados. Es elemental para los hombres que estudian que donde un derecho comienza otro derecho acaba.

Pero aquí, señor presidente, hay que



estudiar el asunto de acuerdo con la modalidad especial que toma el ejercicio de los derechos cuando se ejercen por colectividades. Cuando los hombres se reúnen para ejercitar un derecho cualquiera, ejercen una fuerza que es social, que crece en una proporción incalculable, por motivo de esa asociación misma, que tiene una eficacia que la hace incontrastable para las fuerzas individuales que atacan, para los intereses colectivos dispersos y aun para los mismos intereses del país y que obliga al estado y a la sociedad a reglamentarlo y defenderse contra las consecuencias deplorables de su acción.

La época del individualismo ha concluido; hoy el estado interviene en un sinnúmero de aspectos de la vida y tiene una serie de funciones que antes no tenía. Precisamente por eso, se ve más obligado que nunca a tomar precauciones y medidas respecto de las fuerzas sociales, para que no sean dañosas al ejercicio de otras actividades y derechos.

Para que se dé valor bastante a estas palabras, que tal vez se las creyese como la expresión única de mi pensamiento y evitar que resultara disminuido el concepto, he de basarme en la misma jurisprudencia que ha pretendido traer a esta cámara el señor diputado de Tomaso para defender lo que él ha llamado el derecho de huelga.

Es sabido que en los Estados Unidos los tribunales intervienen en una gran cantidad de asuntos que no son materia de juicio aquí; y en cuestión de huelga existe una gran jurisprudencia en los Estados Unidos, que ha reglado esta materia y ha limitado su ejercicio, de manera de no permitirle la posibilidad de herir derechos superiores e intereses mayores.

**Sr. de Tomaso.** — ¿Si me permite?

No he citado jurisprudencia norteamericana...

**Sr. Araya (R.).** — Leyes.

**Sr. de Tomaso.** — Son cosas muy distintas. He citado textos legales de algunos estados para probar que el derecho de huelga ya se había concretado en algún texto jurídico, sin que yo les dé, por otra parte, mayor importancia.

**Sr. Araya (R.).** — Pero como las le-

yes las interpretan y las aplican los tribunales, quería precisamente definir esas leyes, a que ha hecho referencia el señor diputado, por una autoridad y una voz mucho más autorizada que la mía.

**Sr. Bravo.** — Justamente, señor diputado, la jurisprudencia es anterior a la ley; la ley ha venido después de la jurisprudencia.

**Sr. Araya (R.).** — Es curioso que se haga jurisprudencia sobre leyes que no existen.

**Sr. Bravo.** — Ya le voy a explicar eso a su tiempo.

**Sr. Araya (R.).** — Muy bien; me hará el servicio de explicarme un jeroglífico que no entiendo.

La corte de Massachussets ha declarado lo siguiente en una de sus sentencias, que quiero leer porque es fundamental: "Hay un hecho que limita todavía aún las acciones que pueda cumplir legalmente una unión obrera: es el aumento de poder que posee un grupo de ciudadanos con relación a los otros ciudadanos. Tomemos, por ejemplo—dice—el poder de un obrero para obtener por medio de una huelga que se acceda a su demanda. En general, para triunfar una huelga debe no solamente ejercer la coerción y la imposición, sino que debe ejercer éstas de manera que sean prácticamente irresistibles. Una huelga de obreros que triunfe significa en la mayor parte de los casos, si no siempre, que los huelguistas tienen tal poder de control sobre el trabajo de que tiene necesidad el empresario, que no puede hacer éste otra cosa que acceder a sus reclamaciones.

"Un individuo puede ser abandonado a su suerte en una lucha con otro individuo; pero en una lucha contra un grupo de personas unidas para obtener una misma cosa, la posibilidad de defensa para el individuo es bien débil, si es que ella existe. Es claro que una huelga, por la unión de las personas, tiene un poder de coerción que no puede poseer ningún individuo. El resultado de este mayor poder coercitivo de un grupo de individuos es que lo que es legal para un individuo puede no ser tomado como prueba de que es también legal para un grupo de individuos, o, para expresarse de otra manera, hay casos en que un individuo puede legalmente llevar a ca-

bo lo que un grupo no podría hacer legalmente. Se ha decidido en esta República así, como lo hemos dicho, que la línea de demarcación, que los límites en los cuales un grupo de individuos, como una unión obrera, debe confinar su acción, son mucho más estrechos que en el caso en que los mismos individuos obran separadamente".

De acuerdo con estas doctrinas, los tribunales de los Estados Unidos han considerado que cuando sólo están en juego los intereses individuales, el estado no tiene acción alguna que cumplir y la neutralidad más absoluta por parte de él se impone, dejando al libre juego de las actividades individuales la resolución de las diferencias que las dividen. Pero cuando hay otros intereses o derechos afectados, o que pueden ser lastimados por la acción de un grupo de individuos o de una colectividad, el estado no puede abandonar al individuo aisladamente en frente de esas fuerzas coaligadas para hacer triunfar sus intereses, y en ese caso la intervención del estado se impone.

**Sr. de Tomaso.** — ¿Y qué hace el estado para impedir que el *trust* pague el salario que se le dé la gana?

**Sr. Araya (R.).** — ¡Señor! Yo no quiero hablar de bueyes perdidos; estoy hablando de huelgas.

**Sr. de Tomaso.** — Es que los *trusts* importan una coalición de intereses, lo mismo que las huelgas obreras.

**Sr. Presidente.** — Ruego al señor diputado por la Capital se sirva no interrumpir; oportunamente podrá replicar el señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — Esta limitación a que se refiere la corte de Massachusetts es tanto más estricta, cuanto que establece y reconoce que las fuerzas que utilizan las uniones obreras son fuerzas sociales, y que no es posible que a las fuerzas sociales se las deje derivar en una corriente perjudicial y dañosa a los intereses y a los derechos sociales. Entiende, y con razón, que las fuerzas sociales deben de trabajar en beneficio de la sociedad misma, de sus intereses y de sus derechos, y que si es necesario proteger los derechos inferiores, como son los derechos individuales, con mayor razón debe de ampararse los derechos superiores, como son los de la sociedad, de-

rechos que pueden llegar a lesionarse, como en el caso de una huelga de ferrocarriles, hasta el extremo de atacar la propia vitalidad de un país.

Y vuelvo, señor, al tema que presenté cuando quise solamente ofrecer un aspecto de lo que significa una huelga ferroviaria.

No podemos comparar una huelga ferroviaria con una huelga industrial. En una huelga industrial son los intereses de los empresarios y de los obreros los que están en juego; la sociedad, el resto de la población, asiste más o menos pasivamente a esta lucha, perjudicada, como he dicho, relativamente en sus intereses, porque toda huelga que triunfa y obtiene, sea una disminución de las horas de trabajo, sea un aumento de salario, significa inmediata y necesariamente un aumento en el precio de los artículos de consumo, aumento en los precios que no recae sobre el productor, porque éste lo hace recaer sobre el consumidor, de la misma manera que todo aumento de impuestos recae en último término sobre el mismo consumidor.

Pero en una huelga ferroviaria no se trata ya de intereses individuales o colectivos más o menos respetables; los que están en juego son todos los intereses nacionales; es la solidaridad social la que se ataca; no puede haber producción ni consumo de riqueza sin la circulación; no se puede producir, ciertamente, para que no haya quien consuma. Y no sólo eso: la vida de relación total del país se paraliza; las relaciones de negocio, las relaciones sociales, las de comercio intelectual; en suma, señor, todo lo que es la vida de la sociedad.

No es posible que porque se presenten en lucha dos intereses respetables, si se quiere, de una empresa de ferrocarriles, de un grupo de obreros — 100, 1000, 2000 obreros — siete, ocho, diez o cincuenta millones de habitantes hayan de padecer los perjuicios de esa lucha entre una minoría de la población. ¿Es acaso posible que nosotros aceptemos, señor presidente, la supeditación de todos nuestros intereses y de todos nuestros derechos a los de una clase o de un gremio? Si son respetables los intereses de ese gremio, de esa agrupación de 100.000, de 200.000, de 300.000 personas, ¿no son más respetables los intereses totales de la sociedad, los intereses de los 100 millones de habitantes de los Estados Uni-

dos, de los 60 millones que pueblan la Alemania, de los 40 de la Francia o de los 8 o 10 millones que pueblan la Argentina? ¿Habrán que dar a los intereses inferiores toda la protección y habrá que negar a los superiores el amparo que necesitan? Esta es una doctrina de injusticia, de prepotencia, de dominio de clase o de gremio sobre todos los intereses del país, y esto es lo que yo quiero establecer ante la cámara, para que elaboremos una legislación justiciera que suprima estos conflictos de trabajo que afectan de una manera tan inmediata legítimos intereses nacionales.

Los señores diputados socialistas se llenan la boca siempre que hablan de los Estados Unidos. Allí siempre se garantiza todo derecho; allí siempre pueden ellos, dicen, ejercer toda función; más allá, en tal o cual estado, de los numerosos que constituyen la Unión Americana, viven en un paraíso, porque pueden desarrollar toda clase de coerción contra las empresas capitalistas. Sin embargo, en los Estados Unidos las cortes han planteado la definición del derecho de huelga. Y me interesa que los señores diputados conozcan cuáles son las limitaciones que a ese derecho de huelga han puesto los tribunales norteamericanos.

Por de pronto, los tribunales americanos, antes de resolver sobre ningún conflicto de trabajo, se plantean estas dos cuestiones, que son fundamentales, como se verá en seguida: ¿Cuál es el fin que persigue la huelga? ¿Es un fin lícito, o es un fin ilícito? Y si el fin es lícito, ¿son lícitos los medios que se usan? Y de acuerdo con esos principios y teniendo en cuenta, por encima de los intereses individuales o gremiales, los altos intereses nacionales, en toda su solidaridad y complejidad, en su producción, consumo, comercio, e industria, en defensa de los mismos obreros que sufren por una huelga, porque se ven despedidos de las fábricas, porque pierden salarios, porque ven entrar en sus hogares el hambre que allí se aloja, mientras dura la huelga, y que sólo sale dejándolos endeudados... en salvaguardia de todos estos altos intereses, decía, se han establecido las siguientes limitaciones al derecho de huelga:

“Se prohíbe obtener por medio de una huelga: el monopolio en una pro-

fesión u oficio; crear o mantener un mercado cerrado; la huelga simpática; procurar la expulsión de un obrero, so pretexto de que no pertenece a la unión; forzar a un tercero a violar un contrato por huelga; para violar un contrato del huelguista; para obtener la percepción de una multa impuesta a un empleado, destinada a forzarlo a tomar parte en la huelga; para forzar a un tercero a aceptar reglas de arbitraje hechas totalmente por la unión; y la intervención en el derecho de los patronos de aceptar libremente el mercado de trabajo libre”.

De esta manera, señor presidente, se llega al concepto aquel que exponía un socialista, que no quieren recordar ahora los señores socialistas. Me refiero al concepto del ex presidente del consejo de ministros de Francia, Mr. Briand, actualmente ministro de ese gabinete de conciliación nacional que han formado los franceses en un momento de sano patriotismo, suprimiendo todas sus diferencias, para no pensar sino en la defensa de su hogar y en la salvación de sus instituciones y de su suelo. Así se llega, decía, al concepto que expresan las palabras que yo citara anteriormente y que tienen siempre su aplicación a los señores socialistas, que sólo pretenden defender intereses fragmentarios y de secta, por encima de los altos y superiores intereses de la nación.

**Sr. Repetto.** — Para eso están ustedes: para los altos intereses nacionales.

**Sr. Araya (R.).** — Yo quiero decía Briand, correligionario del señor diputado Repetto...

**Sres. Bravo y Repetto.** — Ex correligionario.

**Sr. Repetto.** — Actual correligionario del señor diputado Araya, dada la forma ministerial en que él aborda este problema, acaso para tranquilizar a la opinión pública de la Nación ante la posible entrada del señor diputado Araya al ministerio de obras públicas.

**Sr. Araya (R.).** — Ahora que se ha desahogado el señor diputado, continuare.

**Sr. Repetto.** — Reconozca el señor diputado que le he dicho la verdad.

**Sr. Araya (R.).** — Quiero reconocer que no existe ningún texto especial que se oponga a que los trabajadores de los ferrocarriles hagan huelgas. Admito por un instante que ese derecho de huelga, teórico, les pertenece efectivamente, y que ellos hayan podido legalmente usarlo. ¡Pero, señores — es necesario decirlo en esta tribuna — hay un otro derecho del que jamás puede hacerse cuestión en este debate y que es superior a todos los otros: es el derecho de la sociedad a vivir! Y añadía: ¡no hay ley, por respetable que sea, cuyo ejercicio sea susceptible de atacar el derecho de la nación a la vida!

Estos son, señor presidente, los principios que el libérrimo país de los Estados Unidos, tan admirado, tan citado y tan comentado por los señores diputados socialistas, aplica en esta materia de la huelga.

**Sr. de Tomaso.** — ¿Hay algún artículo 11 allí?

**Sr. Araya (R.).** — Voy a citarle algo más substancioso que eso. (*Risas.*)

**Sr. de Tomaso.** — Entonces podría- mos modificar el proyecto ahora.

**Sr. Araya (R.).** — Sí, señor diputado; me parece que puede ser que llegue a ese resultado.

Y llego a un punto, señor presidente, que me resulta agradable tratar, porque acostumbrados como estamos nosotros los diputados radicales a que se nos hable de contradicciones, y a que nos diga el señor diputado Dickmann que nosotros comulgamos con Dios y con el diablo...

**Sr. Dickmann.** — Es exacto.

**Sr. Araya (R.).** — ... porque respetando las creencias religiosas de los hombres que forman nuestro partido, dejamos que unos juren por los santos evangelios, y los otros por la patria y su conciencia...

**Sr. Dickmann.** — He dicho eso, señor diputado, nada más.

**Sr. Araya (R.).** — Muy bien: voy a contestar a eso.

¿Qué diríamos nosotros, señor presidente, si este gravísimo defecto que se nos achaca a nosotros...

**Sr. Dickmann.** — Yo no he dicho que sea un defecto, señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — Mejor, entonces.

**Sr. Dickmann.** — ¡Magnífico!

**Sr. Araya (R.).** — Hemos de convenir con el señor diputado Dickmann en que es una falta eso de comulgar con Dios y con el diablo, porque hay que hacerlo con uno o con otro, no con los dos a la vez.

**Sr. Dickmann.** — Yo no comulgo ni con uno ni con otro. (*Risas.*)

**Sr. Araya (R.).** — Los señores diputados socialistas siempre citan la Australia y la Nueva Zelandia, como países de gobierno socialista.

**Sr. de Tomaso.** — Y donde los ferrocarriles son del estado.

**Sr. Araya (R.).** — Permítame, señor...

**Sr. de Tomaso.** — Lo que tiene mucha importancia.

**Sr. Araya (R.).** — Sí, señor; le acepto la importancia y se la voy a dar. Y es curioso, señor, que en Nueva Zelandia, que es un país socialista y de gobierno socialista, existan sanciones contra la huelga.

¡Vea, señor presidente, las contradicciones en que caen los señores diputados socialistas argentinos con respecto al credo de los socialistas de Nueva Zelandia!

**Sr. Dickmann.** — Socialismo sin doctrina, señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — En Nueva Zelandia hay una sanción para los huelguistas; se les aplican multas y penales especiales cuando la huelga ataca ciertos servicios, como ser la producción y distribución de gas, de electricidad y de agua en las poblaciones, huelga de los matarifes y en la distribución del carbón para el consumo y las huelgas en el servicio de tranvías y ferrocarriles. No es nada eso...

**Sr. Dickmann.** — ¿En qué texto o en qué parte está citado eso, señor diputado?

**Sr. Presidente.** — Sírvase no interrumpir el señor diputado.

**Sr. Dickmann.** — Es una pregunta.

**Sr. Presidente.** — Continúa con la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Araya (R.).** — ¡Pero, señor, en las mismas leyes! Y puedo cederle también este libro del señor Ives Guyot, célebre economista.

**Sr. Repetto.** — Que está muerto, según el señor diputado.

**Sr. Dickmann.** — Es una cita...

**Sr. Araya (R.).** — Permítame el señor diputado. No es un falsificador de textos; podrá atacar el socialismo, pero no falsea textos, ni altera conceptos ni doctrinas.

**Sr. Repetto.** — El señor diputado afirmó, hace un instante, que el individualismo ha muerto, y el señor Ives Guyot es el apóstol francés del individualismo.

— Los señores diputados Araya y de Tomaso cambian algunas palabras en voz baja.

**Sr. Araya (R.).** — Adelante. En Australia... (*Dirigiéndose a algunos señores diputados.*) A mí no me molesta que ustedes se afecten, y si les pica es porque les duele. (*Risas.*) Ni me molestan absolutamente sus interrupciones.

En Australia, que es presentada como el paraíso de los socialistas, una colonia inglesa que tiene la misma extensión que los Estados Unidos, en que existen solamente 4 millones de habitantes, y que está, por consiguiente, al abrigo de toda concurrencia, por la naturaleza de sus producciones y por las facilidades de vida, existe, señor presidente, esta disposición en la ley de 22 de mayo de 1903: "Todo funcionario o empleado al servicio de ferrocarriles que haga huelga será considerado, sin que los comisionarios tengan que tomar una decisión de revocación, como habiendo cesado inmediatamente, por el solo hecho de haberse puesto en huelga, de ser funcionario o empleado de ferrocarriles y como habiendo renunciado a todo derecho (si lo tuviere), a toda pensión, gratificación, retiro o renta, así como a todos los derechos y privilegios legales, de cualquier naturaleza que sea, que derivan o dependan del cargo que ocupa como funcionario o empleado, salvo los salarios que le eran debidos en el momento de ponerse en huelga."

He aquí, señor presidente, cómo los señores socialistas, cuando gobiernan, inscriben en sus leyes esos artículos desleales y de traición de que hablaban los señores diputados Dickmann y de Tomaso; he aquí la forma cómo se entiende y se aplica la doctrina por los

señores socialistas, cayendo en contradicciones que no comentaré, pero que la santa madre iglesia socialista por sus doctores sabrá explicar.

Yo no creo, por esas razones, que votando con Briand y con los socialistas de Nueva Zelandia y de Australia, cometa una deslealtad y una traición respecto de los obreros ferroviarios, desde el momento en que ellos, socialistas, son los primeros que la imponen y la aplican cuando tienen el gobierno. Ellos cuando gobiernan, al igual que los demás partidos, temen la anarquía y el desorden, y por eso con las leyes que he citado buscan el orden y el funcionamiento normal de las energías nacionales.

He de terminar, señor presidente, poniendo en este momento toda la sana convicción que ha dirigido mis pasos en la breve vida política que cumpla. Pienso que la política no es un arte, no es el arte de mandar y el arte de dirigir pueblos, engañándolos en sus destinos, sino que la política debe ser una ciencia grande, una ciencia altamente altruista, de mucho corazón, que ha de aplicar los métodos mejores y las más sanas actividades para hacer el gobierno para todos y no para algunos.

Estoy con los señores diputados socialistas, como con todos aquellos que piensan que el gobierno no puede hacerse en beneficio de privilegiados, de castas o de oligarquías. Ha evolucionado mucho el mundo; ya no es posible que el pueblo trabaje para un guerrero o un rey, para una casta, llámese nobleza, clero o burguesía. Hay que trabajar para toda la masa social, para todo eso que nosotros descuidamos u olvidamos, y que recordamos solamente en las grandes conmociones, cuando los gritos de dolor y de fatiga del pueblo llegan hasta nosotros, clamando su miseria, que no aliviamos por falta de conocimiento bastante de la masa obrera.

Yo pienso que debemos encaminarnos a la protección de todos los obreros sin distinción, y por eso miraba con cariño esa puerta que nos abría un nuevo horizonte de política y de gobierno social y saludaba a los que han de venir detrás de los obreros ferroviarios, a los obreros del transporte marítimo, a todos los obreros de la República, que no deben tener un gre-

mio privilegiado dentro de ellos, sino que deben ser todos iguales ante las leyes y tener una protección social igual.

Eso es lo que yo deseo: una protección para todos en los días de ancianidad; para todos deseo yo el descanso en esa hora terrible en que la actividad muere y en que el recuerdo de las horas buenas del pasado hace más duras, más apremiantes las horas de la vejez.

¡Qué diferencia, señor, va de mirar la política como una ciencia de gobierno para todos, a mirarla como la miran los sectarios: como un instrumento para sobreponer los intereses de una clase a los de otras clases más numerosas y más respetables! ¡No! La justicia ha de ser para todos, absolutamente para todos. Y no hemos de hacer la lucha de clases, ni la guerra social, en un país pródigo como el nuestro, donde el trabajo abunda y donde la miseria no existe sino para los que son holgazanes.

**Sr. Dickmann.** — Los desocupados abundan también, señor diputado; no hay más que preguntarlo al departamento del trabajo.

**Sr. Araya (R.).** — Suenan a hueco, señor, en el país, en medio de las cosechas que abundan, ante el espectáculo riente de esas sábanas de flores azuladas del lino, ante las espigas que desbordan, ante el ganado que se apacienta en nuestro territorio y que nos alimenta y alimenta al mundo, suena a hueco, señor, el clamoreo de unos cuantos diputados que gritan miseria y opresión social y proclaman la guerra contra los que poseen.

**Sr. Dickmann.** — ¿Y las semillas que acabamos de votar en la cámara para los colonos que no la tienen?

**Sr. Araya (R.).** — Esa es la obra de la naturaleza, es la sequía, o el exceso de lluvias, es el mal tiempo, que no siempre es propicio a los trabajadores del campo.

**Sr. Dickmann.** — Quiere decir que no hay abundancia para todos.

**Sr. Araya (R.).** — Ese no es el resultado de las leyes, y para subsanarlo está la acción social. Precisamente esa a que se refiere el señor diputado es una obra de progreso social.

Por último, señor, yo, como amigo

de los obreros ferroviarios, he de votar por la aceptación de las modificaciones; no deseo que vuelva el proyecto al senado, porque sé que si se devuelve en esas condiciones el proyecto no llegará a ser ley. No deseo hacer ese agravio a los trabajadores; deseo que ellos reciban ya, inmediatamente, la protección social justísima que reclaman, y en ese sentido, abandonado de todo prejuicio, de todo preconcepto de clase y de tendencia, les doy el voto favorable, seguro, señor, de que a la vez que hago un bien a los obreros ferroviarios, hago bien también a la cultura de mi país.  
(¡Muy bien! ¡muy bien!)

— Los señores Cúneo y Cafferata piden la palabra.

**Sr. Atencio.** — Yo la había pedido con anterioridad, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Ahora la tiene el señor diputado.

**Sr. Cafferata.** — Yo la pedí simultáneamente con el señor diputado Araya, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — El señor diputado por Buenos Aires la había solicitado antes.

**Sr. Cúneo.** — Desearía saber cuál es el orden en que los señores diputados han pedido la palabra.

**Sr. Presidente.** — La tenían pedida desde la sesión pasada los señores diputados Araya y Atencio. Después la han solicitado los señores diputados Cúneo, Cafferata, Bravo y Marcó.

**Sr. Bravo.** — Creo que me corresponde a mí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — La tiene el señor diputado Atencio.

**Sr. Atencio.** — Sin dejarme seducir, señor presidente, por la amplitud que ha tomado el debate, matizado con tantos motivos interesantes, que hubieran podido determinar mi intervención en él, habría votado silencioso por el despacho de la comisión en minoría, que suscribe el señor diputado por la Capital doctor Palacios; pero dos incidencias del debate me obligan a tomar en él una participación inesperada.

Una de ellas se refiere a las palabras pronunciadas por el señor diputado por Córdoba, miembro de la comisión de legislación, doctor Roca, que

en la sesión del cuatro del corriente insinuó la posibilidad de que yo no habría de votar con la minoría de la comisión por el rechazo del artículo 11, introducido a la sanción de esta cámara por el honorable senado; y la otra, una alusión hecha en una de las sesiones anteriores por el señor ministro de obras públicas sobre la actitud de los diputados que sostienen el impuesto que crea esta ley para concurrir al fondo de pensiones y jubilaciones de los obreros ferroviarios, frente a la tentativa reiterada que los mismos diputados hacen en contra del aumento de tarifas en los ferrocarriles.

El señor diputado Roca, que había incurrido en el error de creer que el asunto de la jubilación de los ferroviarios había comenzado a considerarse en la cámara en virtud de un error padecido por los empleados de la secretaría, siendo así que era precisamente todo lo contrario, porque el asunto hubo de no ser considerado por la cámara en virtud de ese error, respondiendo a palabras que yo había pronunciado durante ese debate incidental, decía:

“Ahora, en cuanto al anhelo mismo que la ley importa, en cuanto a lo que hay de sustancia en ella, he de ver si el señor diputado por Buenos Aires ha de acompañarme en la disidencia planteada respecto al artículo 11, que va a la médula de los intereses del gremio ferroviario, que consulta no sólo los intereses materiales, sino lo que hay de más sagrado en la libertad humana, lo que hay de más respetable en el hombre que no sólo labra la seguridad de su familia, que no sólo busca el pan para sus hijos, sino que conserva incólume el tesoro del propio albedrío.” Y agregaba: “Allí he de ver, señor presidente, si los que vienen a proclamar que se violen las disposiciones de forma para obtener la sanción de la ley, han de ir tan hondamente a consultar los verdaderos y primordiales intereses del gremio obrero”.

Yo, señor presidente, no había tenido absolutamente la intención ni había insinuado en forma alguna la idea de que la cámara violara las disposiciones de forma, para obtener la sanción del proyecto, y, al contrario, había manifestado que la cámara, ateniéndose a sus disposiciones, debía entrar inmediatamente a considerar el asunto.

Pero es que, además, el señor dipu-

tado no tenía ninguna razón para expresar esta duda respecto de mi actitud al tratarse el artículo 11, porque yo he tomado en la discusión del proyecto originario una participación activa y he sido uno de los diputados que ha llevado su pensamiento y su idea más lejos, respecto de la libertad de los obreros, respecto de la eficacia de la ley en todo lo que a ellos iba a referirse; yo fui quien lamentó, en aquella circunstancia, que se hiciera esa promesa de ley a que han aludido los señores diputados socialistas reclamando una ley de pensiones y jubilaciones que, al mismo tiempo que obligaba a los obreros a depositar una cuota mensual, desde el momento en que la ley hubiera sido sancionada, estableciera de una manera categórica la jubilación o pensión que les correspondía al día siguiente, si hubiera llegado la oportunidad.

Yo adelanté, pues, en cierto modo, mi opinión. No solamente entendía yo que la ley era defectuosa, porque no satisfacía el anhelo legítimo de los obreros, sino que implícitamente me opuse, por consiguiente, a toda restricción ulterior que pudiera limitar ese derecho y esa justa aspiración.

He de referirme, dentro de un momento, señor presidente, a esta cuestión fundamental del artículo 11; pero he de hablar antes de otro punto. No lo he hecho hasta ahora sino dentro de los límites que yo creo que debe tener el debate que, en parte, por una tolerancia del señor presidente, que yo aplaudo, y, en parte, por lo interesante del tema, se ha desviado considerablemente, abarcando cuestiones que no están comprendidas en él ni podrían ser discutidas, desde que nosotros lo único que tenemos que hacer es aprobar las enmiendas introducidas en el senado o hacer prevalecer la anterior sanción de la cámara.

En primer lugar, he de decir que no hay inconsecuencia por parte de los señores diputados que reclaman el restablecimiento de las tarifas ferroviarias, inspirados en un sentimiento legítimo, en un anhelo popular, en una conveniencia pública, cuando se manifiestan dispuestos a votar por el artículo que establece un impuesto en los ferrocarriles, a los transportes o a los pasajes. No la hay, por la razón que he expresado hace un momento: porque la cámara no tiene aptitud le-

gal en este instante para eliminar o substituir ese artículo: sólo tiene aptitud para insistir en su primitiva sanción, ratificándola donde ya estaba establecido el impuesto, o aceptar la del senado, que la mantiene en otra forma.

Se ha aludido, señor presidente—y me parece que simplemente como un argumento de efecto—a las circunstancias por que pasan las compañías de ferrocarriles, del punto de vista de sus entradas, para motivar una insinuación de postergación del proyecto, presentándose cuadros y datos que demuestran esa mala situación, es decir, la disminución sensible de las entradas.

La ley, señor presidente, no va a tener aplicación inmediata. Su simple reglamentación va a demandar mucho tiempo, sobre todo si se piensa que es el poder ejecutivo el que ha de hacerla, el mismo que reconoce la inoportunidad de su sanción y la conveniencia de su postergación. Además, no ha de tener en muchos de sus aspectos esa aplicación inmediata, desde que falta la verdadera ley, aquella que se refiere el artículo 10., que ha de ser sancionada cuando crea conveniente algún congreso futuro, porque ni la cámara de diputados ni el congreso actual tendrían la posibilidad de obligar a que se hiciera para una fecha determinada.

De manera que las empresas de ferrocarriles no van a tener una obligación inmediata, en lo que se refiere al aporte que a ellas les corresponda, hecho que por sí solo bastaría para destruir el efecto de la argumentación; pero deben recordar los señores diputados que intervinieron en el debate de este proyecto primitivo, que, según los datos que se suministraron entonces a la cámara, las empresas de ferrocarriles poseían un fondo considerable, constituido por las sumas que se retienen actualmente, con el fin de dar las actuales pensiones o jubilaciones que ellas dan a sus obreros, fondos que debían servir y debía establecerse así en la ley, según el pensamiento de algunos de los señores diputados, para contribuir a aumentar lo que la ley establece por otros conceptos con el mismo fin.

De manera que las empresas podrían perfectamente adelantar una parte de esos fondos, a medida que hubieran de

hacer sus contribuciones anuales, para formar el fondo de la ley, de acuerdo con el artículo 30.

Hechas estas manifestaciones, motivadas, como digo, por las incidencias del debate, he de referirme al artículo 11. Desde luego, señor presidente, como he dicho al principio, yo voy a votar por el despacho de la comisión en minoría que suscribe el señor diputado por la Capital, doctor Palacios, y que comprende la disidencia de la otra minoría, cuyo despacho suscriben los señores diputados Roca y Zavala Guzmán; es decir, que he de votar por que sea eliminado el artículo 11, introducido en el senado y que, en realidad, no hace más que realizar la aspiración o el pensamiento que en esta cuestión han tenido y tienen las compañías de ferrocarriles, que se han opuesto en toda forma, con una tenacidad extraordinaria a la sanción de la ley, y que ante la posibilidad de que sus esfuerzos no tuvieran bastante eficacia se han manifestado evidentemente favorables a la idea de que fuera desnaturalizada por un artículo como el artículo 11, que viene a aumentar, diré así, las dificultades, las faltas de simpatías que puede tener la ley para las personas a quienes aparentemente está destinada a favorecer.

Yo no creo, señor presidente, que esta cuestión que está presentada en el texto del artículo 11 pueda suscitar el debate que ha suscitado respecto del derecho de huelga, que no está consignado en el artículo ni tampoco está rechazado por él.

El artículo 11 lo que hace, en realidad, es dificultar la huelga, tiene ese propósito visible y tiene, además, como complemento irritante, en mi sentir, el de castigar a los que se declaran en huelga, que no otra cosa significa privarles del aporte que han hecho durante un tiempo, que puede ser de muchos años, al fondo de jubilaciones y pensiones, tomándolo o restándolo de sus haberes mensuales. Eso significa, en verdad, un castigo al huelguista.

La huelga — derecho de huelga se ha dicho aquí, no sé si está bien expresado el concepto — la huelga, digo la tendrá que reglamentar, si es que es susceptible de ser reglamentada, — y parece que lo es, según los datos de la legislación australiana que se han leído,—la tendrá que prohibir o permitir una ley posterior, una ley que se refiera a esas cuestiones, que son mucho



más fundamentales, y, desde luego, más complejas de lo que parecen.

Yo pienso que no puede estar expresada esa idea tan restrictiva en un proyecto de ley que no tiene otro objeto que el de dar a los obreros ferroviarios una jubilación o una pensión, mediante los recursos que se forman con la contribución de ellos, de las empresas y de un impuesto a los pasajes. De manera que no creo, como digo, que esta sea la oportunidad de ese debate de doctrina que se hace acerca de un punto que no está ni puede estar en discusión al tratarse de esta ley.

Independientemente, pues, de mis ideas sobre el particular, creo que en esta materia no ha de ser la doctrina la que prevalezca, sino las conveniencias, las circunstancias del ambiente, la experiencia de los otros países, porque no es difícil que aun en aquellos en que han sido adoptadas esas ideas extremas que se refieren a la prohibición de la huelga, al arbitraje, etcétera, se reaccione antes de que nosotros abordemos el tema; situación excepcionalmente favorable para nosotros, porque nos permitirá aprovechar la experiencia de los otros y no la propia, que podría ser dañosa y que podría dejar gran sedimento de amargura y de resistencia.

Por eso, prescindiendo de mis ideas sobre esa doctrina, debo manifestar que soy contrario a que se adopte el artículo 11, porque desnaturaliza la ley, porque el pensamiento que contiene no ha estado en ningún momento en la mente de los que la iniciaron, de los que la inspiraron, de los que la solicitaron. Es una verdadera restricción que se hace, además de una desnaturalización de la ley; una verdadera restricción inoportuna, impropia de ser impuesta en una circunstancia como ésta, y que tiene por único objeto restringir un derecho que es indudable, porque si la huelga colectiva podría ser tema de discusión doctrinaria, si podría serlo asimismo el abandono colectivo del trabajo, es claro que no puede serlo el abandono de uno o varios obreros; y uno o varios obreros que abandonaran voluntariamente el trabajo, según el texto de la ley, habrían venido a quedar en las circunstancias que la misma ley establece.

Voy, pues, señor presidente, a dar mi voto por el despacho de la comisión en minoría; entendiendo que, en lo que se refiere a los artículos 10. y 30.,

que el señor diputado Palacios entiende que deben mantenerse tales como lo sancionó la cámara de diputados, las razones expuestas por él bastan para demostrar la bondad de sus ideas; y en cuanto a lo que se refiere al artículo 11, subscripto por las razones que dió, porque entiendo que las que se han opuesto, tanto por el órgano del miembro informante de la comisión, como por algunos otros señores diputados, no son bastantes para justificar la introducción de este artículo en el proyecto. Nada más.

**Sr. Cafferata.** — Pido la palabra.

Aunque debiéramos abreviar, señor presidente, este debate que va tomando proporciones exageradas, no sólo porque la honorable cámara necesita estudiar otros asuntos, sino también porque entiendo que todos los señores diputados tienen ya su opinión hecha en esta materia, como miembro de la comisión de legislación y como firmante del despacho en mayoría, necesito dar los fundamentos de mi voto. Máxime cuando se ha pretendido presentar a todos los diputados que subscribimos este despacho como enemigos de los intereses del obrero, como oponiéndonos a que se satisfagan sus verdaderas necesidades y como queriendo poner trabas a un derecho perfectamente legítimo no sólo de los obreros, sino de toda persona humana: el derecho de trabajar o el derecho de cruzarse de brazos.

Yo quiero dejar constancia, señor presidente, de que tengo tanto o más interés que los demás señores diputados por los futuros jubilados ferroviarios; que aunque no me titulo en esta cámara representante de los obreros, porque represento a los obreros y al pueblo de la nación, tengo por ellos verdadera simpatía. Soy amigo de los obreros, por temperamento, por tendencia, por mi credo católico; y que no soy un amigo platónico lo he demostrado en más de una ocasión en el seno de esta cámara, con diversas iniciativas que son conocidas de todos los señores diputados.

Soy partidario de sus reivindicaciones, de que se respeten sus derechos; pero entiendo que a esos derechos, cuando han de ser ejercitados para violar un contrato, cuando han de ser ejercitados en perjuicio de terceros, sobre todo con perjuicio de los intereses del país, la ley debe ponerle:

sus limitaciones, sus restricciones.

Creo, señor presidente, respecto de esta cuestión de las huelgas, a donde se ha llevado la discusión, con la mayoría de los economistas a quienes he consultado, que siendo la huelga para el trabajador un medio lícito de defensa en los casos extremos, no puede ser impedida sin más ni más por la autoridad política, excepción hecha de los servicios públicos, porque en este caso está la razón suprema del *salus populi, suprema lex est*.

No defiendo, señor, los intereses de las empresas, por más que sean muy respetables. Si los defendiera no hubiera trabajado tanto por que se sancionara esta ley que las afecta económicamente y cuya constitucionalidad entiendo que han de alegar. No me liga, por otra parte, con las empresas más relación que la de simple ocupante de sus vehículos de transporte, o la de subscritor de alguna protesta en sus libros de quejas. Entiendo, señor presidente, defender los intereses de los empleados y obreros de los ferrocarriles, los intereses de la agricultura y los altos intereses del país.

Sin embargo, no estoy del todo conforme con la redacción del artículo 11. Paréceme que pudo haber sido sancionado en forma más clara; pero como en el fondo estoy de acuerdo con esa especie de comisión arbitral para los casos de huelgas y no quiero perturbar la sanción de la ley, porque temo que si volviera a la otra cámara peligraría su aprobación definitiva, no he trepidado en dar el voto en favor del citado artículo.

Por otra parte, señor presidente, yo tengo más fe en la probidad de los hombres. No creo que esa junta a que se refiere la ley, creada por un agregado del senado, y donde han de tener representación el estado, las empresas y los empleados, haya de ser la espada de Breno puesta en la balanza de la justicia para hacerla inclinar del lado de las empresas y de los fuertes, en contra de los débiles y de los obreros; y en todo caso, señor presidente, creo que si alguna vez llegara a acontecer que esta comisión no cumpliera en debida forma sus funciones, no faltarán voces en el pueblo, en la prensa o en el seno de esta cámara, que protestarán contra la iniquidad y contra la injusticia.

He dicho que considero perfecta-

mente justificadas las huelgas, cuando ellas se hacen motivadas y no perjudican los intereses del país. La mayor huelga conocida es, seguramente, la huelga de los dockers de Londres, en el año de 1889, cuando 200.000 obreros recorrían silenciosamente las calles de la gran metrópoli en demanda de algunos peniques más para aumentar sus salarios de hambre. Y esa huelga era presidida por el cardenal Manning, pues era en verdad una gran huelga justa y legítima! Yo creo que si mañana las empresas ferrocarrileras argentinas se coligaran para imponer a los obreros salarios imposibles y esos obreros se declararan en huelga, esa huelga sería perfectamente legítima y la comisión a que se refiere al artículo 70. no podría menos que declararla tal.

Por estas consideraciones, y en el deseo de ser lo más breve posible, terminaré manifestando que he acompañado con mi firma a la mayoría de la comisión en ese artículo 11, porque al hacerlo así, señor presidente, entiendo defender los verdaderos intereses del pueblo, y porque entiendo que defender los intereses del pueblo importa no sólo defender sus reivindicaciones, sino también el orden social; no sólo hablar en nombre de los intereses de un gremio, sino en nombre del interés de todos, no sólo bregar por la defensa de sus derechos sino también marcarle sus responsabilidades y sus deberes.

Nada más.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor diputado Cúneo.

**Sr. Bravo.** — También la había pedido yo, señor presidente, y el señor diputado Cúneo no tiene inconveniente en que yo use primero de ella.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo.** — Una primera consideración que surge en presencia del proyecto que discute la honorable cámara tiene relación directa con la forma y con los procedimientos con que ha encarado siempre el parlamento argentino aquellas medidas que se relacionaban con la clase trabajadora.

Desde el año 1900 o 1902 anda por las carpetas de las comisiones de la cámara un proyecto de ley sobre accidentes del trabajo. Hasta ahora van corridos ya trece años y la cámara

no ha tenido ningún momento para considerar un asunto de tanta importancia. La ley que reglamenta el trabajo de las mujeres y de los niños tardó tres años en sancionarse. Fué necesario que el autor del proyecto solicitara por ocho veces consecutivas que la cámara fijase día para tratar el asunto y, por fin, el proyecto salió en la forma conocida por todos los señores diputados. La misma ley del descanso dominical, la misma ley que instituyó el departamento nacional de trabajo como una oficina de coordinación e informes indispensables para el estudio de las cuestiones sociales en la República, han sufrida las mismas demoras.

Todo esto demuestra la poca preocupación, el poco interés del parlamento por las leyes que tienden a beneficiar en forma directa los intereses de la clase trabajadora, con mayor razón si sabemos que el parlamento ha dictado en breves horas leyes de estado de sitio para reprimir la acción de la clase obrera reclamando mejoras. En veinticuatro horas se dictó una ley de residencia, que tenía por objeto principal sofocar un movimiento de huelga en la capital de la República, aplicando a los extranjeros la pena de deportación, sin forma de proceso, sin defensa y sin apelación; y en veinticuatro horas, también, el congreso argentino sancionó la ley de defensa social, que es la monstruosidad jurídica más grande que exista en los anales de la legislación en todo el mundo civilizado.

En presencia de estas dos circunstancias, y cuando se discute un proyecto de ley que consagra en principio el derecho de jubilación y pensión a los obreros ferroviarios, no es extraño, pues, que el parlamento continúe sobre sus viejas tradiciones y que este proyecto, iniciado el año 1902, sea objeto de discusión en sus detalles en el año 1915.

Para el caso particular de los trabajadores del ferrocarril, la política ha sido adversa, no sólo en el parlamento, sino también en el poder ejecutivo. Es necesario recordar con cuánto empeño los trabajadores ferroviarios resistieron el *lock-out* del ferrocarril del sud en el año 1907; con cuánto tesón resistieron todos los atropellos de la autoridad local que impedía las reuniones, que disolvía asambleas, que arrestaba a los militantes,

que coartaba, en una palabra, toda la acción de los trabajadores en su propaganda. Y el jefe de policía en aquel entonces llegó a declarar que para él los obreros del ferrocarril del sud eran simples beligerantes, y que consideraba que la policía y los obreros se encontraban en estado de guerra.

En presencia de estas declaraciones públicas del jefe de policía, la clase trabajadora argentina, y principalmente el gremio de los ferrocarrileros, se encontró con un hecho revelador de una situación desgraciadamente triste: el gerente del ferrocarril del sud, señor Percy Clark, con fecha 10 de octubre invitaba al señor ministro de obras públicas, ingeniero Maschwitz, antiguo miembro del propio directorio local, a concurrir a la inauguración oficial de una línea en el Neuquén; y esta invitación, publicada por todos los diarios, se produjo justamente en el período álgido, cuando los obreros exigían del poder ejecutivo la aplicación de medidas a fin de cortar en algo los abusos de la empresa y de la policía.

Pero el poder ejecutivo ha tenido para los obreros ferrocarrileros un ministro de obras públicas, y este ministro de obras públicas ha sido siempre, directa o indirectamente, dependiente de las empresas ferroviarias.

Producida la renuncia del ingeniero Maschwitz en 1907, el presidente de la República se creyó obligado a ofrecer el ministerio a alguna persona vinculada a los ferrocarriles, y lo hizo al señor José Frías, que pertenecía al directorio local del ferrocarril central argentino. Los señores diputados recordarán que el señor Frías se creyó a su vez obligado a consultar previamente con el directorio de Londres, y cuando el directorio de Londres le contestó: no nos conviene que usted sea ministro de obras públicas, el señor Frías declinó el ofrecimiento del poder ejecutivo; posteriormente, el ministro Ramos Mexía actuó frente a los ferrocarrileros en huelga por los procedimientos conocidos por la honorable cámara; y, actualmente, desempeña la cartera de obras públicas en el gobierno de la nación el señor Moyano, que ha sido abogado de una de las más poderosas empresas ferrocarrileras del país.

Sr. Zeballos (E. S.). — ¿Me permite, señor diputado.

De la que se separó desagradado, hace varios años...

**Sr. Bravo.** — Perfectamente; pero hubiera deseado que la aclaración viniera de labios del señor ministro.

**Sr. Zeballos (E. S.).** — Pero viene de un amigo personal que se hace solidario de ella.

**Sr. Bravo.** — Le agradezco mucho, señor diputado, la aclaración.

No podemos, pues, creer que los trabajadores de los ferrocarriles han de contar siempre con el apoyo del poder ejecutivo para iniciativas de esta naturaleza, máxime si es el poder ejecutivo quien ha apoyado calurosamente en el senado la inclusión del artículo 11 a este proyecto de ley, que constituye una de sus principales trabas.

Pero el poder ejecutivo no está solo en este asunto; al poder ejecutivo lo acompañan también miembros conspicuos del partido radical: dos diputados radicales firman el despacho de la mayoría, que aconseja a la cámara que sancione la restricción del derecho de huelga; y el señor diputado Araya en sus dos discursos se ha pronunciado, categóricamente diré, a favor del artículo restringiendo el derecho de huelga de los obreros.

Me he preocupado principalmente de buscar a través del discurso del señor diputado Araya los puntos concretos que han servido de base a su argumentación. Me he apercibido de los grandes esfuerzos que ha hecho el señor diputado Araya para acreditar su amor hacia los trabajadores de los ferrocarriles, y al mismo tiempo para prestar su voto al artículo 11 del proyecto.

Decía el señor diputado Araya en su primer discurso, que desde luego es mejor que el segundo (*risas*): "Porque vamos a legislar sobre huelgas, necesitamos tener un concepto exacto sobre huelgas". "No soy contrario a las huelgas, pero creo que se equivocan los que sostienen que existe un derecho de huelga en el sentido que se da comúnmente a esta expresión". Más adelante agrega: "Yo no he encontrado en nuestra legislación, ni en ninguna del mundo, establecido el derecho de huelga". Más adelante: "Existe el derecho de no trabajar". Más adelante: "Hay huelgas de huelgas; hay huelgas de industrias y de ferrocarriles". Y por fin: "Las huelgas ferroviarias hieren el interés nacional, y debe el interés nacional ser protegido".

El discurso de hoy completa, felizmente, el pensamiento del señor diputado Araya, y sabemos ya que por lo menos existe jurisprudencia sobre huelgas y sabemos también que el señor diputado Araya por lo menos se atreve a decir que va a votar el artículo 11.

Pero lo más grave que hay en el primer discurso del señor diputado Araya son las afirmaciones, tan categóricas y tan concretas, que ha traído para reforzar sus argumentos. Yo creo que cuando se tratan asuntos de tanta importancia es necesario proceder con toda buena fe y con toda sinceridad; al fin y al cabo, no todos los miembros de la cámara están en condiciones de poseer al alcance de su mano enciclopedias de derecho, recopilaciones de leyes, como para poder confrontar, llegado el caso, la exactitud de las citas. Entonces, es una regla de buena fe y de hidalguía en los debates citar, cuando se cita, con toda exactitud, e indicar al mismo tiempo las fuentes de donde se toman las citas que se traen a colación en apoyo de las ideas sustentadas.

**Sr. Araya (R.).** — Me parece que se las he indicado.

**Sr. Bravo.** — El señor diputado Araya ha dicho que en ninguna legislación del mundo existe establecido el derecho de huelga. Si el señor diputado no me contradice, voy a creer que eso es efectivamente lo que ha dicho.

**Sr. Araya (R.).** — Yo no quiero interrumpir al señor diputado mientras haga uso de la palabra. Es una virtud que tenemos los radicales hacia los socialistas.

**Sr. Bravo.** — Yo me he preocupado de hojear una enciclopedia para ver si era exacto que no existe una legislación que consagrara el derecho de huelga y me he encontrado con algunos textos muy curiosos, que los voy a citar a la honorable cámara, pasando por alto leyes locales, como algunas que existen en los cantones suizos, otras del Canadá, la ley del Brasil de 1907 sobre sindicatos profesionales, para referirme especialmente a una ley de 27 de abril de 1909 sobre coaliciones y huelgas vigente en España.

Esta ley consta de once artículos. En el primero se reconoce categóricamente a los obreros y patronos el derecho de asociarse, de declararse en huelga y de cerrar sus fábricas para defender sus intereses respectivos. En

el artículo 20. se castiga a los que tratan de impedir con violencia o amenazas que los obreros se declaren en huelga y que los patronos realicen el lock-out.

Pero estos dos artículos estarían dentro del concepto general, de acuerdo con los principios existentes en ésta y en otras legislaciones. Es que la ley de España va más allá: legisla y reglamenta el derecho que tienen los obreros de los servicios públicos para declararse en huelga; y el artículo 50. dispone que debe notificarse a la autoridad, con ocho días de anticipación, cuando la huelga o el lock-out tengan por consecuencia privar a la población de agua, de luz o suspender el servicio de ferrocarriles o dejar sin asistencia a los enfermos o a los hospitales de la localidad; y el artículo 60. exige cinco días de aviso previo para las huelgas o lock-out de los tranvías o que tengan por consecuencia privar a la población de los artículos indispensables para el consumo.

**Sr. Araya (R.).—***(Desde un pisillo.)* No es así, señor diputado: conozco la ley.

**Sr. Bravo.** — ¡Ah! ¿El señor diputado conoce la ley? Entonces, como ve la honorable cámara, el señor diputado ha hecho una cita de mala fe.

**Sr. Presidente.** — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

**Sr. Bravo.** — Sobre todo, ocupe su banca el señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — *(Ocupando su banca.)* Con mucho gusto, señor presidente Bravo.

**Sr. Bravo.** — La ley que cito, señor presidente, figura en el anuario de legislación extranjera de 1909, página 244.

El año 1910, con fecha 12 de abril, entraron a regir en Dinamarca un par de leyes: una sobre conciliación y otra sobre arbitraje, estableciendo los procedimientos necesarios para que los conflictos obreros fueran resueltos amigablemente, y dando derecho a los obreros para prescindir del fallo arbitral cuando los árbitros no pudiesen ponerse de acuerdo con una solución satisfactoria para ambas partes.

En Turquía, señor presidente, en el mes de julio de 1909, se sancionaba también otra ley que tiene relación directa con el servicio ferroviario. Es sabido que la revolución de 1908 tra-

jo como consecuencia para Turquía un levantamiento general de la clase trabajadora, reclamando mejoras relativas al salario y al trabajo. Los gremios que más activamente reclamaron estas mejoras fueron los de la industria del transporte, los de tranvías y de ferrocarriles; y, deseoso de evitar las perturbaciones inherentes a movimientos de esta naturaleza, el parlamento dictó la ley de 1909, cuyas cláusulas principales establecen el arbitraje, como medio conciliatorio para solucionar conflictos entre las empresas y los obreros, acordando a éstos el derecho de huelga cuando la solución arbitral no fuera posible por falta de acuerdo entre patronos y obreros.

**Sr. Araya (R.).** — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

**Sr. Bravo.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — Quiero hacer constar que el texto que ha citado el señor diputado de las leyes de España y de Portugal...

**Sr. Bravo.** — Portugal, no.

**Sr. Araya (R.).** — También Portugal; le anuncio al señor diputado que existe otra ley en Portugal, dictada a raíz de la revolución que se produjo y que derrocó la monarquía.

**Sr. Bravo.** — Yo me refiero a Turquía, señor diputado.

**Sr. Araya (R.).** — En Turquía también. Yo estoy hablando de cosas más recientes.

Quería decir que esos textos que ha citado el señor diputado, en vez de ser un reconocimiento del derecho de huelga, son una limitación de la huelga y obligan, en contra de lo que sostenía el señor diputado Dickmann, a respetar el contrato de trabajo; y de ahí el por qué los que quieren cesar en el trabajo deben dar un aviso de ocho días a los patronos antes de comenzar esa situación.

**Sr. Bravo.** — A las autoridades del estado.

**Sr. Araya (R.).** — O a las autoridades, es indiferente.

De manera que no es un reconocimiento del derecho de huelga, sino una limitación.

**Sr. Dickmann.** — Si no existiese el derecho a la huelga, no sería posible imitarlo.

**Sr. Araya (R.).** — Limitación de la huelga, no del derecho de huelga.

**Sr. Bravo.** — Convendría que el señor diputado leyera los textos.

**Sr. Presidente.** — Ruego al señor diputado que no interrumpa. Puede continuar el señor diputado Bravo con el uso de la palabra.

**Sr. Bravo.** — También el señor diputado ha citado en su discurso, para impresionar, seguramente, a la honorable cámara, una ley inglesa. Dice textualmente el señor diputado: "Si hacemos la comparación, señor presidente, con la legislación de otros países del mundo, nos vamos a encontrar con que la ley que dictamos es de una suavidad excepcional".

El señor diputado recomienda la suavidad excepcional del artículo 11, y agrega: "En Europa se califica la huelga ferroviaria como un delito, y se pena hasta con prisión y con multas fortísimas. Citaré los artículos 4 y 5 de la ley de 13 de agosto de 1895 dictada en Inglaterra".

¿No es así, señor diputado?

**Sr. Araya (R.).** — Así debe ser.

**Sr. Bravo.** — Así es, porque tomo sus palabras del diario de sesiones.

**Sr. Araya (R.).** — Yo no quiero hacer discusión con el señor diputado; me siento altamente satisfecho con que el señor diputado se refiera en toda su disertación al discurso del señor diputado Araya.

**Sr. Presidente.** — Tenga la bondad el señor diputado por la Capital de dirigirse a la presidencia.

**Sr. Bravo.** — Cuando me dirijo al señor diputado por Santa Fe, es para solicitarle que me manifieste si es exacto lo que he leído, para no hacer una rectificación a base de un error, si él me dice que efectivamente existe un error.

**Sr. Araya (R.).** — Rectifíqueme el señor diputado y eche por el suelo mis argumentos.

**Sr. Bravo.** — Así lo espero. *(Risas.)*

**Sr. Araya (R.).** — Esa es su obligación como parlamentario.

**Sr. Bravo.** — La ley de 13 de agosto de 1895 no existe. Hay en Inglaterra una ley de 13 de agosto de 1875, que como se ve es de veinte años antes, y que supongo que es a la que el señor diputado Araya se ha querido referir.

**Sr. Araya (R.).** — Yo ofrezco como comprobación...

**Sr. Bravo.** — Pero es que esa ley de 13 de agosto de 1875 no tiene nada que ver con el trabajo de los ferroviarios.

**Sr. Araya (R.).** — Yo no he hablado de los ferroviarios; y si lee bien el señor diputado, verá que me he referido a otros servicios públicos, como son los de aguas corrientes y gas. De manera que no se alargue por los cerros de Ubeda y concrétese a los ferroviarios.

**Sr. Bravo.** — Voy a los ferroviarios.

Dice el señor diputado: "En Europa se califica la huelga ferroviaria como un delito y se pena hasta con prisión y con multas fortísimas. Citaré los artículos 4 y 5 de la ley de 13 de agosto de 1895, dictada en Inglaterra". Me parece que esto es sostener que la ley del 95 castiga la huelga ferroviaria, y, sin embargo, la ley de 13 de agosto de 1875 se refiere a otros obreros y no tiene nada que ver con los empleados ferroviarios.

**Sr. Araya (R.).** — El señor diputado no tiene razón de hablar de esa ley al referirse a los obreros ferroviarios.

**Sr. Bravo.** — Es que el señor diputado ha citado esa ley hablando de los ferroviarios.

Dice el artículo 40. de la ley de 13 de agosto de 1875: "Todo individuo empleado, sea por las autoridades municipales, sea por una compañía privada, sea por un empresario para el suministro del gas o del agua corriente para las necesidades de una ciudad entera o de un barrio de una ciudad, que rompa sus compromisos voluntariamente y con una intención malevolente, sabiendo o teniendo razonables motivos para pensar que la consecuencia probable de este acto — sea realizado por él solo o con otros — será privar de agua o de gas todo o parte de los habitantes de esta ciudad, será condenado por la corte de jurisdicción sumaria o por una acusación a una multa que no exceda de 30 libras o a prisión, con o sin trabajos forzados, por un tiempo que no exceda de tres meses. Toda autoridad municipal, compañía privada o empresario encargado de esos suministros de gas y agua, hará fijar el texto del presente artículo en un paraje apropiado de sus talleres y renovará, a medida que sea necesario, el

cartel. Pena: por falta de *affichage*, multa de 5 libras cuando más por día. Por rotura de los carteles, multa de 50 chelines como máximo.

El resto de la ley se refiere a delitos cometidos con relación al gas y a las aguas corrientes, sin referirse en modo alguno a los ferroviarios.

**Sr. Araya (R.).** — En modo alguno he aplicado ese texto a los obreros ferroviarios. Ese argumento no puede hacerse de buena fe.

**Sr. Bravo.** — El señor diputado ha aplicado esa ley a los ferroviarios, y si no quiso hacerlo, debió corregir el diario de sesiones.

**Sr. Araya (R.).** — Absolutamente; nunca corrijo nada.

Me parece que el señor diputado tiene oídos para oír y que es suficientemente inteligente para comprender lo que he dicho.

**Sr. Bravo.** — El señor diputado ha dicho lo que yo he leído y no puedo constituirme en inspector de los discursos que pronuncia.

**Sr. Araya (R.).** — No, señor diputado; bastante con que cuide los suyos.

**Sr. Bravo.** — Pero es el caso, señor presidente, que en Inglaterra no hay ninguna prescripción que propiamente califique de delito la huelga de los empleados ferroviarios; y más aun: existen modificaciones recientes a las leyes inglesas, acordando nuevas atribuciones a las sociedades obreras para poder realizar su propaganda a favor de las huelgas.

El año 1906 se dictó en Inglaterra la ley de 21 de diciembre modificando leyes anteriores, a fin de ampliar el derecho de propaganda en la huelga, y es muy interesante que la cámara conozca el origen de esta reforma.

La empresa de Taff Vale había tenido un conflicto con sus obreros. Los obreros de las *trade unions*, mediante palabras, razones y dinero, convencían a los krumiros que trafa la empresa para reemplazarlos de la necesidad de abandonar el trabajo y volver nuevamente a los sitios de donde habían sido sacados por la empresa ferroviaria.

La empresa se consideró afectada por esta conducta de la sociedad obrera, y entabló una demanda ante los tribunales, siendo de advertir que la ley de 1871 que rige la personalidad de las *trade unions* les negaba personalidad

en esta materia. El asunto se perdió en primera instancia; se ganó en segunda instancia, y fué llevado en apelación a la cámara de los lores. La cámara de los lores resolvió que el sindicato debía indemnizar a la empresa ferroviaria de los daños causados por sus procedimientos, a fin de impedir que la empresa ocupara trabajadores en reemplazo de los del sindicato y rompiera de esta manera la huelga que sostenían sus obreros.

La sanción dada por la cámara de los lores trajo como consecuencia un movimiento muy intenso por parte de toda la clase trabajadora inglesa, que veía de esa manera comprometidos sus derechos como organización militante, y fué el partido liberal, apoyado en gran parte por las *trade unions*, el que llevó a la cámara la reforma de la ley, combatida enérgicamente por Mr. Balfour, pero que, no obstante, fué sancionada.

En virtud de esta ley, de diciembre de 1906, las sociedades obreras no pueden ser demandadas y el derecho de propaganda de la huelga ha sido ampliado a términos muy vastos.

También el señor diputado ha traído como argumento a favor del artículo 11 lo ocurrido en Francia con motivo de la huelga ferroviaria de 1910 y ha citado las palabras pronunciadas en el parlamento por el señor Briand.

El señor Briand ha sido efectivamente un militante activo del partido socialista en Francia. El señor Briand ha producido las páginas más extremas del verbalismo revolucionario. Al señor Briand le debe la literatura sindicalista sus mejores páginas; el señor Briand ha sido el apóstol del antimilitarismo, del antipatriotismo, de la huelga general y hasta de la insurrección. Cuando el señor Briand encontró cómodo pasar al ministerio, no tuvo ningún inconveniente en olvidar todo lo que había escrito, con tal de poder ir purificado a dirigir el gobierno de Francia.

Pero hay muchos Briand en el mundo, señor presidente. Yo recuerdo que el señor diputado Araya hacía manifestaciones categóricas de ser sindicalista....

**Sr. Araya (R.).** — ¡Nunca he tenido esa desgracia, señor! (*Risas*).

**Sr. Bravo.** — ...queriendo decir con esto, señor presidente...

**Sr. Araya (R.).** — No es exacto: ¡protesto, señor presidente!

**Sr. Bravo.** — ... que él defendía los derechos de la clase trabajadora en cuanto estuviera organizada, que él era defensor de la acción directa, que él era partidario de todos aquellos movimientos de la clase trabajadora organizada conforme al precepto sindicalista, y que van desde la simple huelga hasta el *sabotage*. Cuando el señor diputado Araya, sindicalista del Rosario, aparece en el parlamento argentino renegando los principios que tres o cuatro años antes había sostenido a favor de sus ideas sindicalistas, me hace acordar del caso de Briand... (*Risas*)... que repudiaba en Francia sus ideas antimilitaristas y antipatrióticas una vez que había ido al gobierno.

**Sr. Araya (R.).** — Este es un gesto de buen humor del señor diputado. No lo puedo tomar en consideración, porque no puedo creer que haga calumnia.

**Sr. Bravo.** — Le agradezco.

**Sr. Araya (R.).** — No le quiero dar ese concepto.

**Sr. Bravo.** — Pero la cita que ha hecho el señor diputado Araya, de la huelga de ferroviarios de Francia, es una cita incompleta. Es exacto que Briand había declarado ante el parlamento francés que iría hasta la ilegalidad para salvar los intereses de la nación, pero no podemos tomar las palabras aisladas de un ministro como base suficiente para deducir de eso que sea el concepto verdadero dentro del cual deben encuadrarse las cuestiones de tanta importancia como ésta, máxime en Francia, señor presidente, que tiene una tradición perfectamente conocida y bien determinada, por resolución de sus cuerpos colegiados, el senado y la cámara de diputados, tradición que es contraria en absoluto a la tendencia sostenida por el señor Briand y a la tendencia sostenida por el señor Araya.

Desde que se dictó la ley de asociaciones en Francia, el año 1884, por todos los medios posibles se ha procurado introducir en la legislación cláusulas restrictivas al derecho que tienen los obreros de los servicios públicos para declararse en huelga, y una de esas cláusulas fué presentada por el ministro de justicia Trarieux en la

cámara de senadores. Conjuntamente llegó la enmienda, de modificación al código penal, con otros proyectos de senadores con el mismo propósito; pero en el año 1896, apenas Bourgeois se hizo cargo de la cartera, retiró por un decreto, que lleva la firma del presidente Faure, aquel proyecto modificando el código penal y dejando las cosas sometidas al derecho común, tal como estaban por la ley de asociaciones del año 1884. Y posteriormente, la misma cámara de diputados, en declaraciones categóricas y precisas, ha resuelto que los obreros ferrocarrileros, en sus conflictos con las empresas, deben ser considerados como procediendo dentro del derecho común sin que les sea aplicable, en modo alguno, el derecho excepcional de funcionarios. Tal la orden del día del diputado Rame, por ejemplo.

La síntesis más completa de esta doctrina ha sido sostenida en el senado de Francia, en las sesiones de julio del año 1909, por el gabinete presidido en esa época por Clémenceau, teniendo la palabra en las deliberaciones el ministro de obras públicas M. Barthou.

La cámara hará un acto de deferencia si me escucha las palabras que voy a leer, pertenecientes al ministro de obras públicas.

Decía el ministro de obras públicas M. Barthou: "Está, pues, reconocido que los funcionarios no pueden declararse en huelga, y el gobierno faltaría al primero de sus deberes si no les reemplazara cuando los funcionarios faltan. Así lo ha hecho, y acepta toda la responsabilidad. Pero en lo que concierne a los obreros de los ferrocarriles, señores, diré todo mi pensamiento. Nadie tiene interés en que el equívoco subsista en el debate; y si hay un equívoco, no dependerá de mí. Bien, señores: sean cuales fueren las consecuencias parlamentarias que podáis deducir de mis palabras; sea cual fuere el pensamiento que tengáis de mi opinión y la actitud del gobierno, lo digo bien alto: que los empleados de los ferrocarriles no pueden estar asimilados a los funcionarios; que se pueden, que se deben asimilar a los obreros de la industria privada.

*"El senador: Touron:* Y entonces ¿para qué vuestra ley?

*"El ministro:* Espero que se me demuestre en virtud de qué texto un obrero, un empleado de ferrocarril,



puede ser asimilado a un funcionario y no deba ser asimilado a un obrero de la industria privada; y, yendo hasta el fondo de mi pensamiento, digo sobre este punto de vista particular: la situación de un agente, empleado de una línea del estado, no difiere de la del agente, empleado al servicio de una compañía privada. Señores: ¿es que acaso traigo una teoría, cuya novedad o cuyo atrevimiento puede sorprenderos? ¿Acaso en 1894 la cuestión no ha sido neta y claramente planteada en la cámara y no ha sido por una gran mayoría, comprendiendo los hombres de todos los partidos, que la cámara ha adoptado justamente la doctrina que sostengo en el senado? ¿Se ha encontrado, acaso, un hombre de estado, sea cual fuere, que haya discutido los derechos de los obreros o empleados de ferrocarriles? Yo alcanzo a comprender vuestras preocupaciones y tengo el deber de contestarlas. En el momento actual espero que se me demuestre que los obreros y empleados de los ferrocarriles no tienen el derecho de declararse en huelga, que no tienen el derecho legal de hacerlo.

*"El senador Tillaye: Palabras imprudentes!*

*"El presidente del consejo, señor Clemenceau: ¿Cuál es el texto de la ley que les niega ese derecho?*

*"El senador Genouvrier: Es cierto; no existe.*

*"El ministro de trabajos públicos, señor Barthou: No hay palabras imprudentes cuando se expresa la verdad, la lealtad y el deber; y, por mi parte, cualesquiera que sean las consecuencias que atribuyáis a mi actitud, prefiero haber dicho lo que pienso y no haberme escudado bajo frases banales.*

*"El presidente del consejo: Y aceptamos toda la responsabilidad de nuestras palabras."*

Esa es la jurisprudencia sentada y sostenida en Francia desde hace veinteaños a propósito de la situación de los empleados ferroviarios en sus conflictos con las empresas.

**Sr. Bas.** — ¿Me permite una palabra el señor diputado, para una breve interrupción?

**Sr. Bravo.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Bas.** — Con el permiso de la presidencia.

Es con el objeto de complementar

los conceptos de M. Barthou, en la misma oportunidad a que él alude, fundando un proyecto concordante con el artículo 11, que "no califica de delito la huelga", pero que determina las responsabilidades de orden civil que surgen del abandono inmotivado del servicio.

Decía M. Barthou textualmente: "Yo he dicho, y no puedo sino expresar ahora que respecto de la ley penal que prohíbe las coaliciones y las huelgas, los obreros y los empleados de los ferrocarriles se encuentran en la condición de los obreros de la industria privada. Yo he dicho que, con respecto a la ley penal, los obreros y empleados ferroviarios podían usar el derecho de huelga, que no les está prohibido por ley; "pero yo me he cuidado muy bien de decir que la huelga no fuera susceptible de entrañar para ellos ninguna responsabilidad". Yo he dicho ya —agrega— en la tribuna del senado, que la impunidad no está asegurada a los empleados ferroviarios que se declaran en huelga, puesto que las compañías de vías férreas tienen contra ellos dos medios: pueden, en primer término, despedirlos y reemplazarlos, derecho que nadie ha desconocido; y, en segundo lugar, están aquellas autorizadas para recurrir..."

**Sr. Bravo.** — Es muy largo el camino a Tiperary; me parece que podría concluir la interrupción.

**Sr. Bas.** — Voy a terminar la lectura.

... "recurrir al artículo 1780 del código civil, modificado por ley de 1890, "para obtener de aquellos el pago de los daños y perjuicios".

Ribot y Clémenceau ratificaron estos conceptos en sesión de 9 de julio de 1909, en que se sancionó la ley.

Nada más. Quería leer esto para completar el concepto de M. Barthou respecto a la situación de los empleados ferroviarios declarados en huelga.

**Sr. Bravo.** — Continúo, señor presidente.

Debiera haberse completado el caso cuando se citaba la huelga de ferrocarrileros de 1910, en Francia, haciendo mérito de dos disposiciones legales que existen en aquel país, mal aplicadas, desde luego, por el ministro Briand.

"La historia de la huelga de ferro-

carrileros—ha dicho Jaurés a propósito de la huelga de 1910—es la historia de la ilegalidad gubernamental más enorme, más impúdica, más continua y más cínicamente servida por todos los agentes del poder, periodistas oficiosos, polizontes y magistrados, que haya presenciado la sociedad francesa desde remotas generaciones". Y era, señor presidente, que en el caso particular de la huelga de ferrocarrileros de Francia, el gobierno había recurrido a la militarización, apoyándose mal en textos legales. Se trataba de hacer servir a los obreros supeditándolos al interés de las empresas y poniendo a disposición de éstas los textos legales de los años 1888 y 1905, a propósito de la movilización militar.

Es evidente que cuando el señor Briand apeló a estos recursos no lo hizo dentro del espíritu ni dentro de la letra de los textos legales que autorizaban al gobierno a movilizar los ferrocarriles: lo hizo única y exclusivamente para colocar todo el poder del estado, toda la fuerza del gobierno, al servicio de las empresas particulares que explotan los ferrocarriles en Francia. El ejemplo de Francia, la actitud de aquel gobierno en el año 1910, no puede ser citado a favor de los trabajadores ni a favor de la legalidad en el parlamento argentino.

También ha hecho mérito el señor diputado de la legislación de los Estados Unidos. En su segundo discurso le interrumpí para decirle que la jurisprudencia era anterior a la ley en aquel país, y el señor diputado me dijo: no es posible, porque la jurisprudencia viene a interpretar la ley. Pues bien: en Estados Unidos la jurisprudencia ha sido anterior a la ley.

En los Estados Unidos han regido siempre, hasta hace muy pocos años, las leyes clásicas que restringían hasta lo imposible el derecho de coalición, y ha correspondido a los jueces inteligentes, a los jueces que afinan su espíritu con la situación del medio ambiente, la interpretación de esas leyes, dando un sentido cada vez más expansivo al movimiento de las clases trabajadoras.

El señor Carrol Wright, comisario del trabajo de los Estados Unidos, hombre vastamente conocido y respetado como una autoridad en la materia, en su libro "La evolución indus-

trial en los Estados Unidos", tan citado por el mensaje del poder ejecutivo que acompañó al proyecto de código nacional del trabajo en el año 1904, explica en uno de sus capítulos cómo ha evolucionado la jurisprudencia en los Estados Unidos, y parte de una sentencia del juez Barret, de Nueva York, del año 1887, hasta llegar a las últimas leyes dictadas en aquel país, que consagran un movimiento muy acentuado a favor del reconocimiento del derecho de huelga para los trabajadores.

Ya el señor diputado de Tomaso ha hecho citas de casos concretos de estados que han dictado leyes en favor de las huelgas. Esas citas podrían completarse con otras numerosas que se registran, precisamente, en una recopilación publicada en el "Boletín del trabajo de Francia de mayo de 1908", y en que se ve el estado de la legislación sobre huelgas, sobre lock-out, sobre boycott, sobre listas negras, en los Estados Unidos hasta 1906. Pero la mejor rectificación para las afirmaciones que ha hecho el señor diputado está en una sentencia última, reciente, dada por los tribunales de Norte América y que está publicada en "La Vanguardia" del día de hoy.

Ha sido tomada de la prensa de los Estados Unidos, y el texto de la noticia dice así:

"El juez James J. Bergen, de la corte suprema del estado de Nueva Jersey, presidente del tribunal encargado de juzgar a los policías que resultan culpables del brutal atentado contra los ferroviarios huelguistas de Roosevelt, al entregar el caso al jurado para el fallo dijo, entre otras cosas, lo siguiente: "Los obreros, cuando no están satisfechos en sus talleres, o cuando les acomode, tienen el perfectísimo derecho de abandonar sus labores y declararse en huelga, y celebrar reuniones de protesta, y pronunciar discursos del tono que tengan por conveniente, y gritar cuanto se les ocurra; y quien los ataque y los maltrate por esta causa es un miserable.

"En el caso que nos ocupa, el jefe de policía de Roosevelt trajo agentes policíacos de Nueva York, que la emprendieron a tiros con los obreros en huelga y mataron a muchos. Pues bien: tanto ese jefe de policía como esos agentes que le secundaron se han hecho culpables del delito de asesinato."

Y finalmente, señor, para referirme

al caso de la República Argentina, debo reivindicar para nuestro país precedentes muy importantes que reconocen el derecho de huelga a los obreros ferroviarios.

Desde luego, debo citar al señor Biale Massé, en su informe sobre el estado de las clases obreras argentinas. Hablando del personal de ferrocarriles dice lo siguiente... Escribía en 1904: "Hace más de dos años que, convencido de que las huelgas de obreros y empleados ferrocarrileros obedecían en primer término a la inseguridad y arbitrariedad del contrato de trabajo, sobre todo en las empresas litorales, presenté al señor ministro de obras públicas un proyecto de reglamentación, etcétera... Se produjo una huelga de importancia, que todavía están creyendo los obreros que eran ellos los que la hicieron, pero que en verdad fué promovida, dirigida y ganada desde Londres, con el objeto de rebajar los salarios." Se refería a un movimiento habido el año 1902. Estas palabras del señor Biale Massé, en un informe oficial, tienen muchísima importancia y sirven también para medir el alcance que pueden darle en un momento dado las empresas al artículo que con tanto fervor apoya el partido radical.

"Pocas veces, dice el señor Biale Massé, se produjo una paralización en el comercio como la de aquella huelga. Pero cuando se supo lo que ella encerraba en su fondo, todos estuvieron, aunque en vano, en favor de los obreros." Y el señor Biale Massé proyectó y entregó al ministro de obras públicas un plan de reglamentación del trabajo en los ferrocarriles. En dicho plan, en el artículo último, se acordaba a los obreros ferrocarrileros el derecho de huelga cuando fuere necesario apelar a ese recurso para protestar contra malos tratamientos en el trabajo o por exceso en la jornada.

He encontrado también otro antecedente, y la cita es muy curiosa por cierto. En un código de policía que pertenece a la provincia de Corrientes, libro III sobre contravenciones, título VI, sobre la seguridad industrial, hay unos artículos que vale la pena que sean conocidos por la honorable cámara. Dice el artículo 251: "Sufrirán de 3 a 15 días de arresto: 1o. *Los que sin pertenecer a un gremio o al personal de un establecimiento resultasen instigadores de una huelga;* 2o. *los huel-*

*guistas que sin cometer delito amenacen a los demás compañeros de trabajo o formen grupos para intimidarlos y tratar de obtener la paralización total de una rama de comercio o de una industria".*

El artículo 252, que se refiere a los ferrocarrileros, dice lo siguiente: "*En el caso del último inciso del artículo anterior (cuando sin constituir delitos se cometan actos que restrinjan la libertad de trabajo), la pena será de 10 a 30 días de arresto, cuando se intente la paralización de un servicio público, de las vías férreas, de la provisión de agua y de los artículos de primera necesidad.*" El código de policía de Corrientes está citado por el señor Alsina en su obra "El obrero en la República Argentina", página 36, año 1905.

Y finalmente debo citar un documento oficial muy caracterizado como antecedente de la legislación de trabajo, y es el proyecto presentado al congreso en el año 1904, en la presidencia del general Roca, por el ministro doctor González. El artículo 411 del proyecto del doctor González dice lo siguiente: "Siempre que una sociedad obrera o patronal o una unión o confederación de los mismos o cualquier núcleo o agrupación permanente o accidental de obreros o patronos que se hubiesen rehusado a los procedimientos del arbitraje para resolver las cuestiones relativas al trabajo, produjesen por medios violentos, proclamas revoltosas o amenazas, una interrupción del comercio interprovincial o internacional, una huelga o paralización general que importase la suspensión del tráfico ferroviario interprovincial o el de exportación o importación de los puertos de la República por más de 10 días consecutivos, se considerará a sus autores o instigadores culpables de atentado grave contra la libertad de comercio y de trabajo y sufrirán la pena de destierro de 1 a 3 años".

Como se ve, el proyecto presentado por el poder ejecutivo exigía como condición para que la huelga de obreros ferroviarios se calificara como un delito, que la huelga durara más de 10 días y que en el procedimiento de la huelga se emplearan medios violentos, proclamas revoltosas o amenazas tendientes a contribuir a la paralización del trabajo. De manera que, en principio, reconocía que los obreros de ferrocarriles tenían el derecho, tenían libertad de ir a la huelga, siempre que

usaran pacíficamente de este recurso.

Por último, y también para la República Argentina, debo citar el caso de la sociedad La Fraternidad que presentó hace poco tiempo a la aprobación del poder ejecutivo algunas reformas a los estatutos, en virtud de las cuales se consideraba desligado de la sociedad al obrero que no aceptara las resoluciones generales de la misma.

Este artículo de los estatutos fué observado por un inspector de justicia, fundándose la observación justamente en el hecho de que la sociedad "La Fraternidad" había sido la instigadora y la realizadora de la huelga de 1912, que la inclusión de este artículo constituía un peligro para la libertad individual, que atacaba la libertad de conciencia, y una cantidad de cosas raras por el estilo.

Tuve oportunidad de refutar el informe del inspector de justicia, y el expediente elevado a consideración del poder ejecutivo fué resuelto favorablemente, a pesar de un dictamen del procurador de la nación. La resolución correspondió a la presidencia del doctor Sáenz Peña, y era ministro de justicia e instrucción pública el doctor Ibarguren.

De manera, pues, que los antecedentes extranjeros y argentinos están muy lejos, muy distantes de ser los que ha citado el señor diputado Araya en su discurso.

No quiero referirme para no ser tan minucioso y para no llevar este crimen al extremo de la alevosía, al caso de Holanda, que no tiene una sola ley del 11 de abril de 1913, sino cuatro leyes dictadas en el mismo día y a propósito de la misma huelga: una determinando el equipo militar de parte del personal, otra disponiendo el estudio de las condiciones del trabajo de los obreros ferroviarios, y dos más determinando modificaciones al código penal, que no importan tampoco, señor presidente, como se ha dicho en esta cámara, una restricción al derecho de huelga, sino que son disposiciones semejantes a las que existen en la ley argentina, y que califican de delito el abandonar un tren, o un servicio cuando se le está prestando, pero en modo alguno importan restricción al derecho de huelga, salvo el caso de que se trate de obreros movilizadas que tienen la obligación de atender los mandatos legales y las órdenes legalmente comunicadas.

Tampoco me voy a detener en la ley suiza de 1897, en cuyo texto no he encontrado nada que se relacione con la restricción al derecho de huelga, y que es una organización general de los ferrocarriles del estado.

Creo, señor presidente, que para que el congreso argentino llegue al extremo de dar una sanción como la que importaría la aprobación del artículo 11 del proyecto que discutimos, es necesario que previamente el congreso haya dictado una legislación completa sobre accidentes del trabajo, que haya reglamentado la jornada del mismo, que haya establecido las bases del salario mínimo, que haya establecido los seguros para los casos de enfermedad; en una palabra, para que se trate de coartar o de retirar a los obreros el derecho que tienen de declararse en huelga, es necesario que se eliminen, en virtud de la acción legal, las causas que pueden provocar la huelga. Hasta tanto la ley no elimine las causas que puedan provocar la huelga, los socialistas y los trabajadores sostenemos de común acuerdo que los obreros tienen en este país y en cualquier parte del mundo el derecho de declararse en huelga para reclamar mejores condiciones de vida y de trabajo.

Nada más, señor presidente. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor diputado Marcó.

**Sr. Marcó.** — Estoy muy de acuerdo, señor presidente, con la exposición que nos hiciera el señor miembro informante de la comisión en mayoría, a la que pertenezco y con la cual he subscrito el despacho. Por esta circunstancia, y en obsequio a la inteligencia superior de los señores constituyentes de la honorable cámara, podía haberme decidido por no contribuir a la prolongación estéril de este debate; pero he resuelto terciar en él muy brevemente — sin el ánimo, desde luego, de aportar mayores elementos de juicio para la sanción definitiva del asunto, tarea que corresponde al señor miembro informante, diputado Bas — porque deseo simplemente que quede constancia en el diario de sesiones de mi humilde parecer, pero a modo de protesta, señor presidente, respecto de algunas interpretaciones que resultan arbitrarias con relación a los propósitos que entraña el proyecto, y un tanto inconsideradas para

con los que formamos la mayoría de la comisión.

Desde luego, como el debate se ha particularizado con motivo especialmente del artículo 11, me considero habilitado para particularizarme a mi vez respecto de las interpretaciones aludidas y con alguna de las teorías que se han emitido en el curso de la discusión.

El señor diputado Palacios ampliando la disidencia del señor diputado Roca, ha manifestado que el artículo 11 del proyecto de la mayoría de la comisión aparece como una emboscada en el despacho del senado, diciendo también que afecta fundamentalmente los derechos del trabajador en cuanto lo priva de la huelga. El señor diputado Zaccagnini, circunscribiéndose al artículo 70., declara que realizará éste una traición del proyecto, y el artículo 11 una violación flagrante de los más elementales derechos civiles, invitándonos por ello a que hagamos ver que la primera vez que el congreso vota espontáneamente una ley que favorece a los trabajadores, ha pensado otorgar un derecho y no castigarlos con un nuevo torniquete, lo que sería una traición y una venganza. A su vez el señor diputado Dickmann nos ha dicho que en el proyecto hay la mente de privar a los obreros del derecho de organizarse y que elevado al carácter de ley, atándolos de pies y manos, se hallarán en la imposibilidad de defenderse y con las condiciones de su trabajo empeoradas.

Por último, el señor diputado de Tomaso, epilogando su disertación, nos expuso que el artículo 11 es inmoral, que él caracteriza de por sí esta promesa de ley mezquina y ridícula; que la única vez que el congreso argentino simula hacer algo de su propia voluntad espontáneamente, en favor de los trabajadores, lo hace en esta forma tan estrecha y tan egoísta, viciando su propia labor, quitándole todo prestigio y presentándolo a la opinión pública, a la opinión de los trabajadores conscientes rodeado de una atmósfera de desconfianza que tiene que hacerlo por eso mismo antipático y estéril.

Para evitarme el desagrado de hacer decir a los señores diputados algo que no hubiera estado en su mente, me he permitido leer lo que resulta del diario de sesiones.

Y bien, señor presidente: dejando todas esas frases a la estimación y al ju-

cio de los señores diputados por lo que afectan y agravan a los miembros de la mayoría de la comisión, yo pregunto: ¿No traducen interpretaciones que no están autorizadas por el texto ni por el espíritu del despacho, y no traducen también una teoría equivocada, que si se incluyera en el sistema de nuestras leyes sustantivas habría de ser funesta a la sociedad? Evidentemente.

La demostración, a mi juicio, es fácil y creo que pueden hacerla los señores diputados con leer una vez más el proyecto. Ninguna de sus disposiciones, ni por asomo siquiera, indica el propósito de privar a los obreros del derecho de asociación, y, por el contrario, —parecerá un tanto extraño—bajo el artículo 11 que se controvierte de una manera implícita y tácitamente, en el deseo de evitar a la sociedad perjuicios mayores y con el pensamiento de que los mismos obreros no incurran en desgracias propias, se les induce a asociarse, a constituirse, a formar instituciones que de una manera colectiva y legalmente los habiliten para defender sus intereses, sea yendo al tribunal a que se refiere el mismo artículo 11, o ya sea utilizando otros medios, tales como el de las asambleas y meetings, recurriendo a la mediación de las autoridades superiores, a los pronunciamientos de los jueces, a los prestigios de las asociaciones particulares o solicitando también el concurso de la prensa, que es siempre eficaz.

**Sr. de Tomaso.** — Podría leerse el artículo 11.

**Sr. Marcó.** — Lo tiene a la vista el señor diputado.

**Sr. de Tomaso.** — Como ha querido recordar lo que dije, podría recordar el artículo 11. Así los señores diputados podrían establecer la exactitud...

**Sr. Marcó.** — Como creo que los señores diputados lo saben de memoria, excúsome, señor presidente, de leerlo.

**Sr. de Tomaso.** — Podía haberse supuesto lo mismo respecto de los discursos.

**Sr. Marcó.** — En cuanto a la teoría misma, desarrollada con los discursos que hemos oído a los señores diputados socialistas, cabe asimismo la demostración de que es fundamentalmente equivocada.

Concretando las ideas que nos ha expuesto el señor diputado Araya, puede decirse que el error de los señores diputados socialistas preopinantes estriba en considerar como una verdad absoluta jurídica y social que la huelga constituye una aplicación del principio de la libertad del trabajo.

El *self help*, o la autonomía individual, en la cual radica la libertad del trabajo, creada, si mal no recuerdo, por el genio político de la raza sajona e incorporado, después de la revolución francesa, a los códigos y a las legislaciones modernas, nada tiene que hacer y es ajena por completo y no valedera ante los intereses superiores colectivos.

La huelga, señor, antes que un derecho, es, propiamente, un fenómeno social. No es un hecho individual, y precisamente por ser un fenómeno social y no un hecho individual, y por ser lo primero, admite la reglamentación que reclaman los intereses de la economía general, de la cual dependen absolutamente tanto los consumidores como los productores. La huelga, por otra parte, es un instrumento o un medio de defensa de hecho acordado a los obreros en favor de sus intereses, legítimos desde luego; pero como se comprende, en virtud de ser, precisamente, un instrumento de defensa legítimo, deja de serlo toda vez que se emplea más allá del derecho que se tiene a obtener una cosa.

El abandono voluntario o la paralización completa de los trabajos de parte de los obreros, fuera de constituir la justicia primitiva, la justicia inicial, de los gremios trabajadores, repugnante con el principio de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, no limita sus efectos a los intereses de los patronos o empresas determinantes de las huelgas.

Cuando los empleados o los obreros de ciertos servicios, como los indicados por el señor diputado Araya,—alumbrado público y aguas corrientes—se declaran en huelga, no se reducen a afectar los derechos de los patronos, empresarios o principales, sino que afectan también los derechos de terceros, los derechos sociales. Cuando, asimismo, los empleados y los obreros ferroviarios interrumpen su labor y se declaran en huelga, ¿acaso se limitan a herir los intereses de las empresas de ferrocarriles? No, señor presidente; a cualquiera se le ocurre

que perjudican gravemente con la paralización de los ferrocarriles los intereses vitales del país; que afectan el transporte de los productos agrícolas, que nos traen el pan de cada día, y que afectan el transporte de los productos ganaderos, de los cuales conseguimos el calado y el vestido.

Por estos conceptos generales, bien ha hecho, pues, la mayoría de la comisión en prever esas extralimitaciones que suelen derivarse del titulado derecho de huelga, que como he dicho no es tal derecho, sino simplemente un fenómeno social. Por eso expresé al principio de mi breve exposición que deseaba dejar constancia de mi humilde parecer en el diario de sesiones, en vía de protesta, porque entiendo que la mayoría de la comisión no ha merecido ni merece el cargo de que ha descendido a aconsejar una inmoralidad, a proponer un torniquete, una traición ni una venganza.

He dicho. (*Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor diputado de Tomaso.

**Sr. de Tomaso.** — Le corresponde al señor diputado Cúneo, que la cedió al señor diputado Bravo.

**Sr. Presidente.** — La tiene el señor diputado de Tomaso, porque entendía la presidencia que el señor diputado Cúneo renunciaba a hacer uso de la palabra al cederla.

**Sr. de Tomaso.** — No renunció a la palabra; la cedió al diputado Bravo.

**Sr. Cúneo.** — Yo cedí la palabra al señor diputado Bravo.

**Sr. Presidente.** — Perfectamente; tiene, entonces, la palabra el señor diputado Cúneo.

**Sr. Cúneo.** — Lamento, señor presidente, tener que intervenir en este debate en un momento completamente desfavorable para mí.

He escuchado atentamente las palabras y los conceptos vertidos por muchos señores diputados y me han producido una impresión desagradable, y tengo que ocuparme de ellos en un momento difícil para mí, máxime cuando es notorio que salgo recién de una enfermedad gravísima y me encuentro, en este momento, por la atención que impone la discusión del asunto, con un desgaste nervioso; no obstante, he de hacer un esfuerzo para exponer con la claridad que me sea posible cuál

es mi modo de pensar, como obrero, respecto de este asunto.

De todo lo que he oído, señor presidente, me parece haber descubierto que el fundamento principal para aceptar el artículo 11, introducido por el senado, sería el temor de que aquel cuerpo encarpetara este anteproyecto de jubilaciones, con lo cual los obreros ferroviarios se quedarían sin la ley. Yo creo que es muy malo prejulgar desde ya sobre lo que hará el honorable senado. El honorable senado ha venido a la cámara de diputados recomendando y solicitando el pronto despacho de asuntos que allí habían obtenido sanción, y esta cámara ha sido tan deferente, que ha sancionado esos asuntos; de manera que si la honorable cámara de diputados quisiera, en este momento, respetar el pensamiento y el espíritu que animaba a los señores diputados cuando sancionaron este proyecto de ley, podría muy bien dirigirse al honorable senado y solicitarle que sea deferente con ella y que acepte, por esta vez siquiera, el pensamiento de esta cámara.

A mi manera de ver, pues, no debe existir ese temor, aparte de que sería prejulgar, repito, sobre la actitud del honorable senado; éste no podría ni debería negarse a dejar subsistente el pensamiento de la cámara de diputados, máxime cuando ésta, desde la fecha de la sanción de su proyecto hasta hoy, ha tenido dos renovaciones. Sería lamentable que, por el supuesto temor de que este proyecto sea encarpetado en el senado, la cámara de diputados, después de haber sido renovada dos veces, quisiera por una nueva sanción, modificar el pensamiento que inspiró el proyecto.

Dicho esto, haré esta otra reflexión: si una ley buena y beneficiosa para la clase trabajadora resulta mala cuando se la reglamenta por el poder ejecutivo, como ha sucedido con la ley que reglamenta el trabajo de las mujeres y de los niños, y la ley de descanso dominical, si una ley buena, repito, resulta mala cuando se la reglamenta, ¿qué sucedería con esta ley mala cuando se la reglamentara peor?

Esta es una consideración que expongo así, en forma desnuda, y que ha de hacer reflexionar a los señores diputados.

Se me ocurre otra cuestión, ya insinuada por alguno de los señores diputados: ese artículo 11, o lo que él

importa, podría incluirse en la ley orgánica de la caja de jubilaciones para los ferroviarios; de manera que hay una razón más para que el senado, conociendo que hay manifestaciones de esta índole en esta cámara, no insista y deje que quede en vigor la primitiva sanción de esta cámara.

Con el fin de ordenar mis ideas, había tomado una infinidad de apuntes, todos interesantes, pero como muchos de los puntos a que se refieren han sido tratados por los demás colegas socialistas que han hecho uso de la palabra, yo no voy a referirme a ellos para no incurrir en redundancia; de manera que he de realizar un esfuerzo mental para rehacer mi trabajo, casi diría para improvisar sobre opiniones que acaban de vertirse. Independientemente de esto, he de tocar otras cuestiones que se refieren al discurso del señor diputado Rogelio Araya, a las cuales no han aludido mis colegas parlamentarios.

El señor diputado Araya decía que las empresas de ferrocarriles no tienen, como los obreros, armas a su disposición con qué defenderse, ni pueden emplear el *lock-out*.

Aunque haya hecho mención de ello el señor diputado Bravo, he de insistir, recordando que el ferrocarril del sud, en 1908, tuvo clausurados sus talleres de Banfield más o menos durante seis meses, y después de haber rendido a los trabajadores por el hambre, de una manera injusta, seleccionó el personal, eliminando a los obreros más ancianos en edad y más antiguos en servicios, a aquellos que por una u otra razón, tendrían que haber respetado porque habían cumplido más de 20 o 25 años de trabajo.

De manera que en el hecho de clausurar los talleres las empresas tienen un arma; y han usado de ella con la mala intención de eliminar a los obreros que les costaban más, porque las empresas se habían visto obligadas a aumentar cada año, o cada dos años, una pequeña cantidad de centavos en los salarios, y de esa manera algunos obreros habían llegado a tener sueldos que ellas consideraban elevados. Se le presentó entonces a la empresa del ferrocarril del sud la oportunidad de despedirlos y de tomar obreros nuevos que resultarían más baratos y que, por ser más jóvenes, darían mayor rendimiento en el trabajo.

Digo esto, señor presidente, para relacionarlo con una opinión vertida por el señor diputado Araya y que consta en el diario de sesiones. "El trabajo —dice el señor diputado Araya— es una mercancía al igual de otras cosas que se dan por un precio determinado y que se niegan cuando ese precio no conviene."

Estoy de acuerdo; pero quiero agregarle que aparece otro fenómeno social, como decía el señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra al referirse a las huelgas; y es éste, señor presidente: que no solamente el trabajo es algo que se niega, se vende y se compra, sino que la misma clase trabajadora, por ese fenómeno a que aludo, queda convertida en una cosa que se niega, se compra o se vende, según se le ocurra a la clase capitalista. Y los fenómenos que se están produciendo en este instante en el país, donde la crisis se hace sentir, ponen esto de relieve: ¿Pueden en este momento los trabajadores de la República Argentina decirle a la clase capitalista, que sus brazos y su inteligencia, se los vendan a las empresas por tanto dinero y para tantas horas de trabajo? ¿Pueden hacer eso los obreros de la República Argentina? No, señor, no pueden hacerlo. Y queda demostrado en este caso que no es cierto que el trabajo sea un artículo que los obreros pueden vender como se les dé la gana. ¿Van a vender su trabajo como se les dé la gana a la clase capitalista que, apoderada del gobierno, dicta las leyes necesarias para que, por medio de los impuestos de aduana, su salario no les alcance para la subsistencia? Y cuando los salarios no le alcanzan para su subsistencia, cuando los medios de vida sean insuficientes, cuando haya crisis de trabajo, en una palabra, cuando resultaran ser, lisa y llanamente, esclavos del capital, tendrán que someterse a los caprichos de los capitalistas.

¿Cómo querer hablar de la libertad de trabajo cuando no hay trabajo, como ocurre en estos momentos? ¿Qué hacemos con decirles a los trabajadores: ustedes tienen libertad de trabajar? ¿Cómo van a trabajar, si no tienen dónde ocuparse? ¿Será suficiente darles pan bazo? ¿Será suficiente, acaso, crear las cocinas económicas? Eso es sencillamente — me permito repetirlo, porque creo haberlo dicho ya una vez — un insulto a la miseria.

Me ha de permitir la presidencia que tenga yo también que referirme al señor diputado Araya, porque es el único diputado radical que ha hablado de este asunto, que debiera interesar directamente al partido radical, en un momento como este, en que es necesario manifestarse abiertamente ante la masa del pueblo de la República, que ha de elegir en breve presidente y vicepresidente de la Nación. No es posible continuar como hasta hoy en una forma ambigua y de equilibrio; hay que decirle al pueblo de la República a dónde se va y por qué medios se quiere llegar. Entonces, el partido radical tiene la obligación a mi modo de ver y en mi modesta opinión, de decirle a la clase trabajadora, muy clara y terminantemente, qué piensa de estas cosas. Porque si hemos de atenernos a las frases y a los discursos que sus oradores pronuncian en las plazas públicas; si hemos de atenernos a esa actitud ambigua del señor diputado Araya, yo me permito exclamar desde esta banca: ¡guay de la clase trabajadora argentina el día que los radicales fueran al gobierno! Porque no se hace otra cosa en las plazas públicas que denigrar a la diputación socialista, que, después de todo, si bien podemos tener algún defecto individual, personal, estamos sentados aquí por voluntad de la mayoría del pueblo de la Capital, representando genuinamente los intereses de la clase trabajadora; y, si se nos denigra en esa forma, hay que esperar, hay que creer que los procedimientos de un gobierno radical serían funestos y desastrosos para los intereses de la clase obrera, máxime cuando se ha dicho, por boca del mismo diputado Araya, que las huelgas deben reglamentarse. Y si la reglamentación de las huelgas, expresada así, vagamente, en este recinto habría de ser algo correlativo con las ideas manifestadas por muchos miembros del partido radical, en otras épocas, pero que son, después de todo, miembros conspicuos e influentes del radicalismo, es el caso de repetir lo que dije hace un momento: ¡guay de la clase trabajadora argentina el día que los radicales fueran al gobierno!

De manera, entonces, que como obrero he dicho y repito que exijo del partido radical manifieste qué es lo que piensa en cuestiones de huelga.

He de referirme, pues, para ver lo



que puede esperar la clase trabajadora sobre el particular, a un antecedente concreto.

El año pasado, como es notorio, presenté a esta cámara un proyecto de minuta de comunicación al poder ejecutivo, diciendo que veríamos con agrado se licenciara el setenta por ciento de los conscriptos del ejército y de la marina, con el propósito de hacer economía, y manifesté entonces que durante los cuatro meses que permanecieran bajo las armas los obreros conscriptos habrían adquirido la suficiente preparación para defenderse en el caso determinado de una imaginaria e imposible agresión.

Las palabras con que fueron recibidas las opiniones del grupo parlamentario socialista quiero leerlas. Son las palabras pronunciadas por el señor diputado Demaría y aceptadas en un todo por el señor diputado Araya.

El señor diputado Demaría decía lo siguiente: "Pedirle a la cámara que emplace a la comisión para que despache en un término de uno o dos días la destrucción del ejército, es proceder con ese criterio conocido, que dice que hay casos en que los hombres proceden con la sencillez de un niño y el aliento de un gigante. No es el momento de entrar a analizar cifras concretas, sino simplemente decirle a la cámara si entiende que puede pedírsele a ninguna comisión que despache la supresión del ejército en el término de cuarenta y ocho horas y en momentos como éste, en que, precisamente, debido a una serie de perturbaciones de índole financiera, la gran cantidad de desocupados que hay en todos los grandes centros urbanos de la República es muy posible que haga necesaria la presencia efectiva del ejército para contribuir, como siempre lo ha hecho, a guardar el orden y hacer respetar la vida y la propiedad de los habitantes".

Estas son las palabras textuales que he tomado del diario de sesiones, pronunciadas por el señor diputado Demaría en aquella ocasión.

En seguida, cuando hizo uso de la palabra el señor diputado Araya, dijo estas textuales palabras: "Para mí no se trata de una cuestión de economías, sino, como muy bien lo ha dicho el señor diputado Demaría, de saber si podemos suprimir en el momento actual el ejército, porque no otra cosa significa el proyecto de resolución de que se trata".

**Sr. Araya (R.).** — Pero yo no sé a qué viene eso; es como tomar la ocasión de los cabellos.

Yo he defendido la existencia del ejército, no solamente como guardián del territorio nacional, sino como el guardián del tranquilo ejercicio de las leyes, de la paz y del orden interno de la República; y eso no tiene nada que hacer con la represión de las huelgas por medio de la fuerza armada.

**Sr. Cúneo.** — Ya verá el señor diputado si tiene o no que ver.

Y luego continúa el señor diputado Araya con estas palabras: "Yo no hago más que adherirme a lo manifestado por el señor diputado por Buenos Aires".

**Sr. Araya (R.).** — El señor diputado sería un mal comentarista de las leyes, y con su criterio sus libros de derecho no podrían leerse.

**Sr. Cúneo.** — No se trata de eso. Yo no he aprendido derecho en los libros...

**Sr. Araya (R.).** — Por eso comenta muy mal.

**Sr. Cúneo.** — No he estudiado derecho, pero he aprendido en el libro de la vida lo que puede esperar el trabajador de la clase capitalista, de aquellos que lo explotan.

**Sr. Araya (R.).** — Ya ve como está ganando su dieta perfectamente tranquilo y olvidado de los obreros que trabajan. (*Muy bien! Risas.*)

**Sr. Cúneo.** — De modo, pues, que esa actitud ambigua manifestada por un diputado radical, hoy, en el seno de la cámara, va teniendo su explicación en estos antecedentes que he leído.

Pero me voy a permitir leer otros antecedentes también de sumo interés, para que se note con cuánta razón recibimos con mucho recelo el proyecto de ley de jubilación de ferroviarios con el artículo 11 que viene del senado.

Allá por el año 1905—es público y notorio—hubo lo que se llamó la revolución del 4 de febrero. "La Vanguardia", con toda justicia, la ha llamado, no la revolución, porque no fué tal cosa, sino el motín del 4 de febrero. Y dice "La Vanguardia" de esa fecha: "Sofocada la torpe y criminal revuelta que acaba de conmover al país y en momentos en que el gobierno parecía preocupado en solucionar las múltiples dificultades que le crea-

ra el reciente motín, le vemos iniciar de súbito, al amparo del estado de sitio, una persecución furiosa y despiadada en contra de nuestra floreciente y ya robusta organización obrera. Cuando no se había extinguido aún el eco de los cañonazos disparados por la bárbara soldadesca; cuando el gobierno no había arrestado aún a los pocos cómplices del motín que han sido habidos, la policía clausura violentamente todos los locales obreros, cierra sus imprentas, viola domicilios de obreros a toda hora del día y de la noche, y da una formidable batida en todo el país, arrestando y encarcelando a una infinidad de valientes y abnegados campeones del movimiento obrero. Y mientras esto sucedía, la prensa burguesa, sin excepción, pedía clemencia para los revolucionarios extraviados, pero no tenía una sola palabra de defensa para este buen pueblo obrero que cimenta con su labor la grandeza del país, y sufre, sin embargo, los errores y excesos de aquellos que lo mandan. ¿Qué significa esta violenta persecución obrera a raíz de una revuelta genuina y exclusivamente burguesa? ¿Qué significa esta unánime actitud de la prensa burguesa que pide clemencia para los que arruinan y abochornan al país y no pide ni dice nada en favor de aquellos que lo enriquecen y lo honran? Estos hechos significan que la burguesía argentina ha llegado a formarse una clara conciencia económica de clase que orienta su política en un sentido concordante. Las bajas rencillas y hasta las torpes y criminales revueltas de las camarillas políticas burguesas son prácticas convencionales que se desestiman cuando se trata de explotar o amordazar a la víctima común: la clase trabajadora. En ningún momento de nuestra vida política ha habido, como en éste, en el gobierno y en la clase dirigente tanta decisión, tanta unanimidad para hostilizar y perseguir la organización y el movimiento obreros".

Siguen otros párrafos y concluye así: "Para caracterizar el espíritu de hostilidad que anima a los burgueses en la hora presente basta citar el hecho de un revoltoso oficial de línea que se captaba la simpatía de los burgueses y la clemencia del consejo de guerra, advirtiendo que se había movido con su compañía para reprimir un movimiento huelguista."

Creo, señor presidente, que "La Vanguardia" al publicar este manifiesto del comité ejecutivo del partido, hacía referencia a ese hecho luctuoso que dió en llamarse la tragedia de Pirovano. El oficial que comandaba esas fuerzas venidas desde Bahía Blanca declaró ante el consejo de guerra que él se había movido con su tropa para venir a Buenos Aires a sofocar una huelga. No creo que sea necesario agregar que se trataba de un militar, conspicuo radical. De modo que los antecedentes radicales con respecto al movimiento obrero ya pueden ir tomándolos en cuenta los trabajadores de nuestro país: están dispuestos en cualquier momento a engañar a las tropas llamadas a defender la integridad de la patria, para sofocar movimientos obreros donde luchan los hombres que, como decía el manifiesto, labran la riqueza y el buen nombre del país.

Siguiendo la misma cuestión bajo otro aspecto, el señor diputado Araya decía en su segundo discurso (que es peor que el primero, como afirmaba el diputado Bravo), que cuando la ley existe es necesario respetarla. Esto nos decía el señor diputado Araya, probablemente para llamarnos al orden y al cumplimiento de la ley; esto lo decía el señor diputado Araya, que ha demostrado con sus correligionarios importársele un comino de la ley y de la constitución cuando se trata de hacer un motín como el del 4 de febrero, por ejemplo, (*Risas*.)

Y voy a comprobar mi afirmación con hechos, no con palabras, ni cosas inventadas.

En "La Vanguardia" del 5 de octubre de 1905—y cito "La Vanguardia" porque este diario reprodujo, como cualquier otro, las noticias referentes a los tribunales,— se leía lo siguiente: "En el proceso que se inició con motivo del motín del 4 de febrero de 1905 contra el doctor Crotto (hijo del actual senador nacional) declaró éste, ante el juez doctor Astigueta, que se había levantado en armas porque el congreso de la nación había dictado la ley de elecciones por distritos o por circunscripciones y el partido radical entendía que la ley era violatoria de la constitución...."

Como se ve, bastábale a este señor saber que el partido radical había declarado inconstitucional esa ley, para creerse facultado para tomar las